ACUERDO IMPEPAC/CEE/280/2026, QUE PRESENTA LA SECRETARÍA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA QUE EMANA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANCIAMIENTO, RELATIVO A LA MODIFICACIÓN DEL CALENDARIO PRESUPUESTAL CON DETALLE MENSUAL DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2026, QUE RECIBIRÁN LOS PARTIDOS POLÍTICOS PARA ACTIVIDADES DE REPRESENTACIÓN POLÍTICA ANTE EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, DERIVADO DE LA DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTES ANTE DICHO ÓRGANO COLEGIADO DEL PARTIDO POLÍTICO SOMOS.

G L O S A R I O

CEE:	Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana.
Código Electoral Local:	Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos.
Constitución Federal:	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Constitución Local:	Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.
IMPEPAC:	Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana.
LEGIPE:	Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Ley de Partidos:	Ley General de Partidos Políticos.
Lineamientos de Liquidación:	Lineamientos aplicables al Procedimiento de Liquidación de los Partidos Políticos que no obtuvieron el porcentaje mínimo establecido de votación válida para conservar su registro o acreditación y los que dejen de cumplir con los requisitos necesarios para obtener el registro ante el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana.

A N T E C E D E N T E S

1. DESIGNACIONES Y TOMAS DE PROTESTA PARA INTEGRAR EL CEE DEL IMPEPAC. A partir de los procesos de selección y designación realizados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), el órgano superior de dirección del IMPEPAC

se ha integrado conforme a los acuerdos **INE/CG293/2020**, **INE/CG374/2021** e **INE/CG2243/2024.** En cumplimiento a los resolutivos de dichos instrumentos, las y los consejeros designados rindieron la protesta de ley en las fechas correspondientes, quedando conformada la actual integración de la siguiente manera:

Acuerdo INE / Fecha de Emisión	Fecha de toma de protesta	Nombre de la Consejería	Cargo	Periodo:
INE/CG293/2020 30 de septiembre de 2020	01 de octubre de 2020	Pedro Gregorio Alvarado Ramos	Consejero Electoral	7 años
		Elizabeth Martínez Gutiérrez	Consejera Electoral	7 años
INE/CG374/2021 16 de abril de 2021	17 de abril de 2021	Mireya Gally Jordá	Consejera Presidenta	7 años
		Mayte Casalez Campos	Consejera Electoral	Para concluir el encargo al 23 de agosto de 2027
INE/CG2243/2024 26 de septiembre de 2024	01 de octubre de 2024	María del Rosario Montes Álvarez	Consejera Electoral	7 años
		Adrián Montessoro Castillo	Consejero Electoral	7 años
		Víctor Manuel Salgado Martínez	Consejero Electoral	7 años

2. APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE 2026. En fecha dieciséis de diciembre de dos mil veinticinco, se publicó en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", Número 6502, Sexta Época, el **DECRETO NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO**, por el que se aprobó el presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del primero de enero al treinta y uno de diciembre correspondiente al año dos mil veintiséis.

En ese sentido, cabe precisarse que al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, se le autorizó como presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal correspondiente al año dos mil veintiséis, el siguiente:

Anexo 3 Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana Pesos					
Concepto	Total	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Fiscales	Subtotal	Recursos Federales (Etiquetado)
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana	118,194,750.21	118,194,750.21	-	118,194,750.21	-
Financiamiento Público a Partidos Políticos Año Ordinario	115,780,744.17	115,780,744.17	-	115,780,744.17	-
Financiamiento por Actividades de Representación Política 6%	6,946,844.65	6,946,844.65	-	6,946,844.65	-
Financiamiento Público a Partidos Políticos por Actividades Específicas	3,473,422.33	3,473,422.33	-	3,473,422.33	-
Ayudas Sociales a Personas	36,400.00	36,400.00	-	36,400.00	-
Total	244,432,161.36	244,432,161.36	-	244,432,161.36	-

3. DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL IMPEPAC. Con fecha ocho de enero del año en curso, el pleno del Consejo Estatal Electoral, emitió el acuerdo **IMPEPAC/CEE/001/2026** se aprobó la distribución del presupuesto de egresos de

este organismo electoral local, el programa operativo anual, la estructura orgánica y tabulador de sueldos para el personal de base y eventual para el ejercicio fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2026, autorizado mediante decreto número novecientos noventa y ocho, publicado en el periódico oficial "tierra y libertad", número 6502, sexta época, de fecha dieciséis de diciembre de dos mil veinticinco.

4. DISTRIBUCIÓN DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO ASIGNADOS A LOS PARTIDOS POLÍTICOS. El mismo ocho de enero del año en curso, el pleno del Consejo Estatal Electoral, emitió el citado acuerdo **IMPEPAC/CEE/002/2026** mediante el cual se aprobó la distribución del financiamiento público asignado a los partidos políticos con registro acreditado ante este órgano comicial para el sostenimiento de actividades ordinarias, específicas y de representación política, para el ejercicio fiscal correspondiente al año 2026, autorizado mediante decreto número novecientos noventa y ocho, publicado en el periódico oficial "Tierra y Libertad", número 6502, sexta época, de fecha dieciséis de diciembre de dos mil veinticinco.

5. ACUERDO IMPEPAC/CEE/016/2026. El quince de enero del dos mil veintiséis, el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense aprobó, la conformación, integración y vigencia de la Comisión Ejecutiva Permanente de Administración y Financiamiento de este órgano electoral:

COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE	INTEGRANTES	PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANCIAMIENTO	C. P. María del Rosario Montes Álvarez	C. P. María del Rosario Montes Álvarez
	Mtro. Pedro Gregorio Alvarado Ramos.	
	Mtra. Elizabeth Martínez Gutiérrez	

6. ACUERDO INE/CG/344/2026. Con fecha veinticinco de junio del presente año, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el citado acuerdo por el cual emitió resolución, sobre la solicitud de registro como partido político nacional presentada por la organización de la ciudadanía denominada "Construyendo Sociedades de Paz, A.C." estableciéndose en sus puntos resolutivos lo siguiente:

...

PRIMERO. Procede el otorgamiento de registro como Partido Político Nacional a la organización denominada "Construyendo Sociedades

de Paz, A.C.," bajo la denominación "Partido Paz", en los términos de las consideraciones de esta Resolución, toda vez que reúne los requisitos establecidos por la LGIPE y la LGPP. Dicho registro tendrá efectos constitutivos a partir del día primero de julio de dos mil veintiséis.

SEGUNDO. Comuníquese al PPN denominado "Partido Paz", que deberá realizar las reformas a sus Documentos Básicos a fin de cumplir cabalmente con los extremos establecidos por los numerales 164, 165, 166 y 167 del Instructivo, así como en los Lineamientos en materia de VPMRG y las disposiciones normativas relativas al cumplimiento del principio de Paridad Sustantiva; en términos de lo señalado en las consideraciones 77 a 82 de la presente Resolución, a más tardar el treinta y uno de agosto de dos mil veintiséis. Las modificaciones a sus Documentos Básicos deberán hacerse del conocimiento de este Consejo General en el término establecido por el artículo 8, numeral 1, del "Reglamento sobre modificaciones a Documentos Básicos, Registro de integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de Agrupaciones Políticas y Partidos Políticos Nacionales; así como respecto al registro de Reglamentos internos de éstos últimos y la acreditación de sus representantes ante los Consejos del Instituto Nacional Electoral", aprobado mediante el Acuerdo INE/CG272/2014, para que, previa resolución de procedencia sean agregados al expediente respectivo.

TERCERO. Se apercibe al PPN denominado "Partido Paz" que, en caso de no cumplir en los términos con lo señalado en el Punto Resolutivo Segundo de la presente Resolución, el Consejo General de este Instituto, procederá a resolver sobre la pérdida del registro como PPN, previa audiencia en la que la interesada será oída en su defensa en términos de lo preceptuado por el artículo 94, párrafo 1, inciso d) de la LGPP.

CUARTO. El Partido Político Nacional deberá notificar a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos la integración definitiva de sus órganos directivos nacionales y, en su caso, estatales, nombrados en términos de sus Estatutos, su domicilio social y número telefónico a más tardar el catorce de septiembre de dos mil veintiséis, de conformidad con lo establecido por el apartado IV del Reglamento sobre modificaciones a documentos básicos, registro de integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de agrupaciones y partidos políticos; así como respecto al registro de Reglamentos Internos de estos últimos y la acreditación de sus representantes ante los consejos del Instituto Nacional Electoral.

QUINTO. Se requiere al Partido Político Nacional denominado "Partido Paz" para que remita a esta autoridad, los Reglamentos derivados de sus Estatutos, una vez aprobados por el órgano estatutario facultado para tal fin, a efecto de proceder conforme a lo señalado por el artículo 36, párrafo 2 de la Ley General de Partidos Políticos.

SEXTO. Se instruye a la DEPPP a fin de que realice las gestiones necesarias a efecto de que, a partir del primero de julio de dos mil veintiséis, el PPN denominado "Partido Paz" goce de las prerrogativas señaladas en el artículo 26 de la Ley General de Partidos Políticos, las cuales se ejercerán conforme a los plazos, procedimientos y determinaciones que resulten aplicables. Asimismo, el PPN denominado "Partido Paz", deberá notificar en forma inmediata el nombre de la o las personas acreditadas para tales efectos, así como

las cuentas bancarias en las cuales deberá depositarse el financiamiento público federal, las que deberán cumplir con los requisitos previstos en el Reglamento de Fiscalización.

SÉPTIMO. Una vez que el proyecto de resolución del procedimiento ordinario sancionador que aún se encuentra en curso, identificado en la presente resolución, sea presentado a la consideración de este Consejo General, se resolverá lo conducente.

OCTAVO. Se instruye a la UTF para que proceda en términos de lo señalado en la parte final de la consideración 83 de la presente Resolución.

NOVENO. Notifíquese en sus términos la presente Resolución, al PPN denominado "Partido Paz".

DÉCIMO. Expídase el certificado de registro al PPN denominado "Partido Paz".

DÉCIMO PRIMERO. Publíquese la presente Resolución en el Diario Oficial de la Federación e inscríbase en el libro respectivo

...

7. ACUERDO INE/CG/347/2026. Con la misma fecha del veinticinco de junio del presente año, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el citado acuerdo por el cual emitió resolución, sobre la solicitud de registro como partido político nacional presentada por la organización de la ciudadanía denominada "Personas Sumando en 2025, A.C." estableciéndose en sus puntos resolutivos lo siguiente:

...

PRIMERO. Procede el otorgamiento de registro como PPN a la organización denominada "Personas Sumando en 2025, A.C.", bajo la denominación provisional "Somos México", en los términos de las consideraciones de esta Resolución, toda vez que reúne los requisitos establecidos por la LGIPE y la LGPP. Dicho registro tendrá efectos constitutivos a partir del día primero de julio de dos mil veintiséis.

SEGUNDO. Comuníquese al PPN denominado provisionalmente "Somos México", que deberá realizar las adecuaciones a sus Documentos Básicos a fin de cumplir cabalmente con lo establecido en el artículo 25, numeral 1, inciso d), de la LGPP, en relación con los numerales 164, fracción I, incisos a) y b), y 165, fracción I, inciso a) y fracción III, inciso f) del Instructivo, de conformidad con lo descrito en las consideraciones 73 y 74 de la Resolución de mérito; así como lo estipulado en el apartado de "Observaciones adicionales respecto del análisis a los Documentos Básicos", en términos de lo señalado en las consideraciones 77 a 82 de la presente Resolución, a más tardar el treinta y uno de agosto de dos mil veintiséis. Las modificaciones a sus Documentos Básicos deberán hacerse del conocimiento de este Consejo General en el término de lo establecido por el artículo 8, numeral 1, del "Reglamento sobre modificaciones a Documentos Básicos, Registro de integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de Agrupaciones Políticas y Partidos Políticos Nacionales; así como respecto al registro de Reglamentos internos de éstos últimos y la acreditación de sus representantes ante los Consejos del Instituto Nacional Electoral", aprobado mediante el Acuerdo INE/CG272/2014, para que, previa resolución de procedencia sean agregados al expediente respectivo.

TERCERO. Se apercibe al PPN denominado provisionalmente "Somos México" que, en caso de no cumplir en sus términos con lo señalado en el punto resolutivo SEGUNDO de la presente Resolución, el Consejo General de este Instituto, procederá a resolver sobre la pérdida del registro como PPN, previa audiencia en la que el interesado será oído en su defensa en términos de lo preceptuado por el artículo 94, numeral 1, inciso d), de la LGPP.

CUARTO. El PPN deberá notificar a la DEPPP la integración definitiva de sus órganos directivos nacionales y, en su caso, estatales, nombrados en términos de sus Estatutos, su domicilio social y número telefónico a más tardar el catorce de septiembre de dos mil veintiséis, de conformidad con lo establecido por el apartado IV del Reglamento sobre modificaciones a documentos básicos, registro de integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de agrupaciones y partidos políticos; así como respecto al registro de Reglamentos Internos de estos últimos y la acreditación de sus representantes ante los consejos del Instituto Nacional Electoral.

QUINTO. Se requiere al PPN denominado provisionalmente "Somos México" para que remita a esta autoridad, los Reglamentos derivados de sus Estatutos, una vez aprobados por el órgano estatutario facultado para tal fin, a efecto de proceder conforme a lo señalado por el artículo 36, numeral 2, de la LGPP.

SEXTO. Se instruye a la DEPPP a fin de que realice las gestiones necesarias a efecto de que a partir del primero de julio el PPN denominado provisionalmente "Somos México" goce de las prerrogativas señaladas en el artículo 26 de la LGPP, las cuales se ejercerán conforme a los plazos, procedimientos y determinaciones que resulten aplicables. Asimismo, el PPN denominado provisionalmente "Somos México", deberá notificar en forma inmediata el nombre de la o las personas acreditadas para tales efectos, así como las cuentas bancarias en las cuales deberá depositarse el financiamiento público federal, las que deberán cumplir con los requisitos previstos en el Reglamento de Fiscalización.

SÉPTIMO. Notifíquese la presente Resolución a la UTCE, para su conocimiento y efectos legales conducentes, respecto a lo resuelto en la consideración 73, respecto a lo estipulado en el numeral 164, fracción I, incisos a) y b), del Instructivo, en materia de la denominación y emblema.

OCTAVO. Una vez que el proyecto de resolución del procedimiento ordinario sancionador que aún se encuentra en curso, identificado en la presente resolución, sea presentado a la consideración de este Consejo General, se resolverá lo conducente.

NOVENO. Notifíquese en sus términos la presente Resolución, al PPN denominado provisionalmente "Somos México".

DÉCIMO. Expídase el certificado de registro al PPN denominado provisionalmente "Somos México".

DÉCIMO PRIMERO. Publíquese la presente Resolución en el DOF e inscríbase en el libro respectivo.

...

8. ACUERDO IMPEPAC/CEE/208/2026. El treinta de junio de dos mil veintiséis el Pleno del Consejo Estatal Electoral de este Instituto Estatal Electoral aprobó el citado acuerdo por el cual resuelve lo relativo a la solicitud de registro como partido político local presentada por la organización ciudadana constituida en asociación civil denominada Bien-Estar Ciudadano A.C., estableciéndose en sus puntos de acuerdo lo siguiente:

...

PRIMERO. Este CEE, es **competente** para emitir el presente acuerdo en términos de la parte considerativa del mismo.

SEGUNDO. Se determina **PROCEDENTE** otorgar a la Organización Ciudadana el registro como Partido Político Local bajo la denominación provisional de "BIENESTAR CIUDADANO", al haberse cumplido los requisitos establecidos en los artículos 10, 16, 17, 18 y 19 de la LGPP; y procedimiento establecido en el Reglamento.

TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva la emisión de certificado de registro como Partido Político Local bajo la denominación provisional de "BIENESTAR CIUDADANO", con efectos a partir del 01 de julio del 2026, en términos de lo establecido por el artículo 19 de la LGPP.

Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, atendiendo lo relativo en términos de la parte considerativa, que las comunicaciones con dicho partido político, sea provisionalmente bajo la denominación "B. CIUDADANO", en tanto se generan las adecuaciones señaladas en el punto de acuerdo DÉCIMO TERCERO del presente acuerdo.

CUARTO. Se aprueba, la integración de sus Órganos Internos, consistentes en **ASAMBLEA ESTATAL, COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL Y COMITÉS MUNICIPALES**, en términos de la parte considerativa del presente acuerdo.

QUINTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva la inscripción de sus órganos de dirección, en el libro correspondiente, en términos de los artículos 98 y 100 del Código Electoral Local.

SEXTO. Se requiere al Partido Político, para que en el plazo de **SESENTA DÍAS HÁBILES, contados a partir de la notificación del acuerdo correspondiente, lleve a cabo la integración paritaria del COMITÉ MUNICIPAL DE COATETELCO.**

SÉPTIMO. Se aprueban LOS DOCUMENTOS BÁSICOS del Partido Político, consistente en Declaración de Principios, Programa de Acción y **con salvedades** los Estatutos en términos de la parte considerativa de la denominación y emblema, y se determina la procedencia legal y constitucional de los mismos.

OCTAVO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva la inscripción de los documentos básicos del Partido Político, en el libro correspondiente, en términos de los artículos 98 y 100 del Código Electoral Local.

NOVENO. Se requiere al Partido Político, para que en el plazo de SESENTA DÍAS HÁBILES, contados a partir de la notificación del acuerdo correspondiente, emita los Reglamentos establecidos en sus Estatutos.

DÉCIMO. Se requiere al Partido Político, para que en el plazo de SESENTA DÍAS HÁBILES, contados a partir de la notificación del acuerdo correspondiente, lleve a cabo la integración de sus órganos internos pendientes de integración, en términos de sus Estatutos y cumpliendo con el principio de paridad de género.

DÉCIMO PRIMERO. Se requiere al Partido Político, para que en el plazo de SESENTA DÍAS HÁBILES, contados a partir de la notificación del acuerdo correspondiente, lleve la integración de sus órganos internos pendientes de integración de Dirección, en términos de sus Estatutos en Cuautla, Jiutepec, Tepoztlán y Zacualpan de Amilpas, cumpliendo con el principio de paridad de género.

DÉCIMO SEGUNDO. Se requiere al Partido Político, para que en el plazo de TREINTA DÍAS HÁBILES, contados a partir de la notificación del acuerdo correspondiente, notifique a este Instituto Local, lo relativo a su DOMICILIO SOCIAL, en términos del artículo 25, inciso l) de la LGPP.

DÉCIMO TERCERO. Se requiere al Partido Político, para que a más tardar el 15 de agosto de 2026, reforme sus estatutos y demás documentos básicos ajustando el nombre de su organización, su denominación, emblema, lema y logotipo con base en lo aquí expuesto.

DÉCIMO CUARTO. En caso de no cumplir con lo señalado en el punto de acuerdo anterior, el Consejo Estatal Electoral procederá a resolver sobre la pérdida del registro como partido político local correspondiente.

DÉCIMO QUINTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva se generen las acciones correspondientes a efecto de que al Partido Político, acceda al Financiamiento Público y Prerrogativas que por derecho le corresponde.

DÉCIMO SEXTO. Se **instruye a la Secretaría Ejecutiva** a efecto de que notifique el presente acuerdo al Instituto Nacional Electoral, en específico a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral y a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral.

DÉCIMO SÉPTIMO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva notifique con copia certificada del presente acuerdo, a través de su representante legal, a la Organización Ciudadana, en el domicilio que obre en el expediente de la misma.

DÉCIMO OCTAVO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que publique el presente acuerdo en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos, y asimismo se publique en la página de internet de este Instituto Electoral, en atención al principio de máxima publicidad.

...

9. CIRCULAR INE/UTVOPL/89/2026. El uno de julio del año en curso se recibió la citada circular por el cual se hace del conocimiento a esta autoridad los documentos aprobados por el Consejo Estatal Electoral del Instituto Nacional Electoral en la sesión extraordinaria urgente celebrada el veinticinco de junio del mismo año consistentes en:

Número	Rubro
Resolución INE/CG344/2026	Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, sobre la solicitud de registro como Partido Político Nacional presentada por la organización de la ciudadanía denominada "Construyendo Sociedades de Paz, A.C."
Resolución INE/CG347/2026	Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, sobre la solicitud de registro como Partido Político Nacional presentada por la organización de la ciudadanía denominada "Personas Sumando en 2025, A.C."
Acuerdo INE/CG349/2026	Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se distribuye el financiamiento público, así como las prerrogativas postal y telegráfica que gozarán los Partidos Políticos Nacionales a partir de julio y hasta diciembre de 2026.

10. SOLICITUD DE ACREDITACIÓN ANTE EL IMPEPAC DEL PARTIDO POLÍTICO SOMOS. Con fecha siete de julio de dos mil veintiséis, los CC. Guadalupe Acosta Naranjo, Presidenta del Comité Nacional del partido político nacional SOMOS, Cecilia Guadalupe Soto González, Secretaría General del Comité Nacional y

representante legal del partido, así como Roberto Heycher Cardiel Soto, Secretario de Operación Electoral y Alianzas, remitieron escrito en la oficina de correspondencia de este Instituto, identificado con número de folio 001817, por el cual solicita a este Instituto la acreditación del partido político nacional SOMOS como partido político nacional ante este Organismo Público Local.

11. ACUERDO IMPEPAC/CEE/216/2026. El nueve de julio de dos mil veintiséis el Consejo Estatal Electoral de este Instituto Estatal Electoral aprobó el citado acuerdo mediante el cual se tiene por acreditado al Partido Político Nacional denominado "Partido PAZ" ante este Organismo Electoral Local, en términos de la resolución INE/CG344/2026.

12. ACUERDO IMPEPAC/CEE/217/2026. De la misma manera, el nueve de julio de dos mil veintiséis el Consejo Estatal Electoral de este Instituto Estatal Electoral aprobó el citado acuerdo mediante el cual se tiene por acreditado al Partido Político Nacional Somos ante este Organismo Electoral Local, en términos de la resolución INE/CG347/2026.

13. REDISTRIBUCIÓN DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO ASIGNADO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS. IMPEPAC/CEE/218/2026. El nueve de julio de dos mil veintiséis se aprobó por el Consejo Estatal electoral el acuerdo **IMPEPAC/CEE/218/2026** por el cual se aprobó la redistribución del financiamiento público asignado a los partidos políticos con registro acreditado ante este órgano comicial para el sostenimiento de actividades ordinarias y específicas, así como la prerrogativa señalada en el artículo 30, inciso d), del Código Comicial Vigente, para el ejercicio fiscal del año 2026, derivado de la creación de nuevos partidos políticos nacionales y locales.

14. ACUERDO IMPEPAC/CEE/239/2026. El catorce de agosto de dos mil veintiséis se aprobó el acuerdo relativo a la modificación del calendario presupuestal con detalle mensual del financiamiento público a partir del mes de agosto 2026, que recibirán los partidos políticos para actividades de representación política ante el Consejo Estatal Electoral, derivado de la designación de representantes ante dicho órgano colegiado del partido político nacional PAZ.

15. PRESENTACIÓN DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN. El día veinte de agosto de dos mil veintiséis el partido político PAZ a través de su representante presentó ante este Instituto recurso de reconsideración en contra del acuerdo

IMPEPAC/CEE/239/2026, una vez realizado el trámite respectico el recurso fue remitido al Tribunal Electoral del Estado de Morelos a través del oficio IMPEPAC/SE/MSL/2617/2026, órgano jurisdiccional que registró el recurso con el número de expediente **TEEM/REC/25/2026-2.**

16. OFICIO IMPEPAC/DEOYPP/433/2026. Con fecha veintiséis de agosto de dos mil veintiséis el Director Ejecutivo de Organización y Partidos Políticos remitió el oficio citado por el que informó a todas las áreas del Instituto que el partido político SOMOS realizó la designación de su representante propietario y suplente y se verificó que dicha designación cumple con los requisitos previstos en los Estatutos.

17. ACUERDO INE/CG344/2026. El tres de septiembre de dos mil veintiséis el Consejo General del INE aprobó el acuerdo por el cual se declaró la procedencia constitucional y legal de la modificación del emblema y los colores de "SOMOS", dispuesta en el artículo 1, fracción III, de sus Estatutos.

18. OFICIO INE/DEPPP/DE/DPPF/2628/2026. El día ocho de septiembre de dos mil veintiséis se hizo del conocimiento de este Instituto el oficio de referencia suscrito por el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, en el que se informó el estatus de las modificaciones a los documentos básicos del partido cuya denominación aprobada es: **SOMOS.**

19. OFICIO IMPEPAC/DEOYPP/464/2026. El día cuatro de septiembre de dos mil veintiséis el Director Ejecutivo de Organización y Partidos Políticos remitió el oficio de referencia por el que anexó el proyecto de distribución de financiamiento público para actividades de representación política ante el Consejo Estatal Electoral del IMPEPAC.

C O N S I D E R A N D O

I. COMPETENCIA. De conformidad con lo establecido en los artículos 41, Base V, apartado C y 116, segundo párrafo, fracción IV, incisos a) y b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, párrafo tercero, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos; el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, tendrán a su cargo en sus respectivas jurisdicciones, la organización de las elecciones bajo la premisa de que en el ejercicio de la función electoral

serán principios rectores los de constitucionalidad, certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad, equidad, definitividad, profesionalismo y paridad de género. Con base en dichas disposiciones, se colige que el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, ejercerá funciones en las siguientes materias:

1. Derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos políticos.

2. Educación cívica.

3. Preparación de la jornada electoral.

4. Impresión de documentos y la producción de materiales electorales.

5. Escrutinios y cómputos en los términos que señale la ley.

6. Declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones locales.

7. Cómputo de la elección del titular del Poder Ejecutivo.

8. Resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación electoral, y conteos rápidos.

9. Organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados en los mecanismos de participación ciudadana que prevea la legislación local.

10. Todas las no reservadas al Instituto Nacional Electoral.

11. Las que determine la ley.

II. PRINCIPIOS RECTORES DE LA MATERIA ELECTORAL. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 41, Base V, apartado C y 116, párrafo segundo, fracción IV, incisos a) y b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, párrafo tercero del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos; el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, tendrán a su cargo en sus respectivas jurisdicciones, la organización de las elecciones bajo la premisa de que en el ejercicio de la función electoral serán principios rectores de la materia: los de constitucionalidad, certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad, equidad, definitividad, profesionalismo y paridad de género. Con base en dichas disposiciones, se colige que el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, ejercerá funciones entre otras, en

materia de derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos políticos.

III. FINES DEL OPLE. De igual numeral, el numeral 65, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, establece que son fines del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, contribuir al desarrollo de la vida democrática y coadyuvar en la promoción y difusión de la cultura política; consolidar el régimen de partidos políticos; garantizar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones; asegurar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo y de los Ayuntamientos del Estado y, en su caso, los procesos de participación ciudadana; así como, promover la participación ciudadana en la emisión del sufragio y velar por la autenticidad y efectividad del mismo.

IV. CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE MORELOS. En el ámbito local, el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, dispone en su ordinal 63, que el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana es el depositario de la autoridad electoral, que en el ámbito de su competencia garantizará la correcta aplicación de las normas electorales. Los artículos 66 fracción VI y 78 fracciones I, III, VI y IX del mismo ordenamiento legal, disponen que corresponde al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana llevar a cabo las actividades necesarias para la realización de la jornada electoral, y faculta al Consejo Estatal Electoral para expedir los reglamentos y lineamientos necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones.

Asimismo, en los artículos 100, 103 al 118 del Código Electoral en cita, se dispone que una de las atribuciones de la Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos es apoyar la integración e instalación de los Consejos Distritales y Municipales Electorales; asimismo, se establecen los requisitos que deberán satisfacer quiénes integrarán los órganos desconcentrados, así como las atribuciones que tendrán, sin menoscabo de lo que disponga en el tema el Reglamento Nacional de Elecciones.

V. INTEGRACIÓN DEL INSTITUTO. De igual forma, el numeral 69 del Código Electoral Local, estipula que el Instituto Morelense ejercerá sus funciones en toda la Entidad y se integra con los siguientes órganos electorales:

a). El Consejo Estatal Electoral;

b). Las Comisiones Ejecutivas Permanentes y Temporales;

c). Los Consejos Distritales Electorales;

d). Los Consejos Municipales Electorales;

e). Las Mesas Directivas de Casilla, y

f). Los demás organismos que la normativa y este Código señalen.

VI. MÁXIMO ÓRGANO DE DIRECCIÓN Y DELIBERACIÓN DEL OPLE. En ese sentido, el artículo 71, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, señala que el Consejo Estatal Electoral es el órgano de dirección superior y deliberación del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana y responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral.

VII. Por su parte, el artículo 83, del citado Código, establece que el Consejo Estatal conformará para el mejor desempeño de sus atribuciones, comisiones ejecutivas, las cuales tendrán como objetivo planear, organizar, dirigir y controlar el desarrollo adecuado de las actividades de las diferentes direcciones y órganos técnicos del Instituto Morelense, de acuerdo a la materia encomendada. Las comisiones ejecutivas permanentes con que contará el Consejo Estatal, son las siguientes:

> ...
> I. De Asuntos Jurídicos;
> II. De Organización y Partidos Políticos;
> III. De Capacitación Electoral y Educación Cívica;
> **IV. De Administración y Financiamiento;**
> V. De Participación Ciudadana;
> VI. De Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional;
> VII. De Quejas;
> VIII. De Transparencia;
> IX. De Fiscalización;
> X. De Imagen y Medios de Comunicación; y,
> XI. De Fortalecimiento de la Igualdad de Género y No Discriminación en la Participación Política.
> ...

El énfasis en nuestro.

VIII. Así mismo, se precisa que corresponde a la Comisión Ejecutiva Permanente de Administración y Financiamiento, en términos del artículo 91, fracciones I, IV, y V, del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Morelos las siguientes atribuciones:

...

I. Aprobar y supervisar los programas y proyectos que desarrolle la Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento;

II. Emitir sugerencias encaminadas a la optimización de los programas y proyectos aprobados para la Dirección Ejecutiva;

III. Analizar la viabilidad de implementar programas y proyectos Adicionales al programa anual de actividades de la Dirección Ejecutiva, en función de la asignación presupuestal;

IV. Elaborar o rendir al Consejo Estatal los informes o dictámenes derivados del ejercicio de sus funciones y someterlos a su conocimiento o aprobación;

V. Analizar, discutir, modificar y aprobar el anteproyecto anual del presupuesto de egresos del Instituto que le sea remitido por la Secretaría Ejecutiva para la posterior aprobación por parte del Consejo Estatal, y

VI. Elaborar el proyecto de manual de organización y el catálogo de cargos y puestos de la rama administrativa del Instituto y someterlo para su aprobación al Consejo Estatal.

...

IX. Que el artículo 41, Base II, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que el financiamiento público para los partidos políticos que mantengan su registro después de cada elección, se compondrá de las ministraciones destinadas al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, las tendientes a la obtención del voto durante los Procesos Electorales y las de carácter específico. Se otorgará conforme a lo que disponga la ley.

X. Que el anterior artículo, Base II, inciso a), determina que el financiamiento público para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos se fijará anualmente multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral, por el sesenta y cinco por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. El treinta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior.

XI. Que el artículo 41, Base II, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que el financiamiento público por actividades específicas, relativas a la educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales, equivaldrá al tres por ciento del monto total del financiamiento público que corresponda en cada año por actividades ordinarias. El treinta por ciento de la cantidad que resulte de

acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior.

XII. Que el artículo 41, Base III, Apartado A, de la norma fundamental, dispone que el Instituto Nacional Electoral será autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión destinado a sus propios fines y al ejercicio del derecho de los Partidos Políticos Nacionales, de acuerdo con lo que establezcan las leyes.

XIII. Que la Base III, Apartado B, del mismo artículo constitucional, establece que para fines electorales en las entidades federativas, el Instituto Nacional Electoral administrará los tiempos que correspondan al Estado en radio y televisión en las estaciones y canales de cobertura en la entidad de que se trate, conforme a lo que determine la ley.

XIV. Que la Base V, apartado B, del artículo 41, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que corresponde al Instituto Nacional Electoral en los términos que establecen esta Constitución y las leyes:

a) Para los Procesos Electorales Federales y Locales:

1. La capacitación electoral;

2. La geografía electoral, así como el diseño y determinación de los Distritos electorales y división del territorio en secciones electorales;

3. El padrón y la lista de electores;

4. La ubicación de las casillas y la designación de los funcionarios de sus mesas directivas;

5. Las reglas, Lineamientos, criterios y formatos en materia de resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación electoral; conteos rápidos; impresión de documentos y producción de materiales electorales;

6. La fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y candidatos,

7. Las demás que determine la ley.

XV. Que los artículos 116, segundo párrafo, fracción IV, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 99 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 63, 69, fracción I y 71 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos; establecen que el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, gozará de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones y contará con un órgano de dirección superior y deliberación denominado Consejo Estatal Electoral, integrado por un Consejero Presidente y seis Consejeros Electorales, con derecho a voz y voto; por un Secretario Ejecutivo y un representante por cada partido político con registro o coalición que concurrirán a las sesiones sólo con derecho a voz, siendo responsable de vigilar el cumplimento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral.

XVI. Que los artículos 9, numeral 1, incisos a) y b), 10, numeral 1, 23, párrafo 1, inciso d) y l), 25, numeral 1, incisos n) y 26, párrafo 1, inciso b), de la Ley General de Partidos Políticos, regula que dentro de las atribuciones del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, corresponde reconocer los derechos y el acceso a las prerrogativas de los partidos políticos locales y los candidatos a cargos de elección popular en las entidades federativas; registrar los partidos políticos locales; asimismo, las organizaciones de ciudadanos que pretendan constituirse en partido político nacional o local deberán obtener su registro ante el Instituto o ante el Organismo Público Local, que corresponda; así como los demás que les otorguen la Constitución y las leyes relativas y aplicables.

Además, son derechos de los partidos políticos, entre otros, acceder a las prerrogativas y recibir el financiamiento público en los términos del artículo 41 de la Constitución, de la Ley General de Partidos Políticos y demás leyes federales o locales aplicables. Y en las entidades federativas donde exista financiamiento local para los partidos políticos nacionales que participen en las elecciones locales de la entidad, las leyes locales no podrán establecer limitaciones a dicho financiamiento, ni reducirlo por el financiamiento que reciban de sus dirigencias nacionales.

Asimismo, los partidos políticos tiene como obligación aplicar el financiamiento de que dispongan exclusivamente para los fines que les hayan sido entregados, y las demás que establezcan las leyes federales o locales aplicables

Por tanto, son prerrogativas de los partidos políticos participar, en los términos de la Ley General de Partidos Políticos, respecto del financiamiento público correspondiente para sus actividades.

XVII. Que el artículo 50, numerales 1 y 2, de la Ley General de Partidos Políticos, dispone que los partidos políticos tienen derecho a recibir, para desarrollar sus actividades, financiamiento público que se distribuirá de manera equitativa, conforme a lo establecido en el artículo 41, Base II, de la Constitución Federal, así como lo dispuesto en las constituciones locales. Dicho financiamiento público deberá prevalecer sobre otros tipos de financiamiento y será destinado para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, gastos de procesos electorales y para actividades específicas como entidades de interés público.

XVIII. Que el artículo 51, numerales 1, incisos a) y c), 2 incisos a) y b) y 3, de la Ley General de Partidos Políticos, señala que los partidos políticos tendrán derecho al financiamiento público de sus actividades, estructura, sueldos y salarios, independientemente de las demás prerrogativas otorgadas en esta Ley, conforme a las disposiciones siguientes:

a) Para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes:

- El Consejo General, en el caso de los partidos políticos nacionales, o el Organismo Público Local, tratándose de partidos políticos locales, determinará anualmente el monto total por distribuir entre los partidos políticos conforme a lo siguiente: multiplicará el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral federal o local, según sea el caso, a la fecha de corte de julio de cada año, por el sesenta y cinco por ciento del salario mínimo diario vigente para el Distrito Federal, para los partidos políticos nacionales, o el salario mínimo de la región en la cual se encuentre la entidad federativa, para el caso de los partidos políticos locales.
- El resultado de la operación señalada en el inciso anterior constituye el financiamiento público anual a los partidos políticos por sus actividades ordinarias permanentes y se distribuirá en la forma que establece el inciso a), de la Base II, del artículo 41 de la Constitución Federal.
- Las cantidades que, en su caso, se determinen para cada partido, serán entregadas en ministraciones mensuales conforme al calendario presupuestal que se apruebe anualmente.
- Cada partido político deberá destinar anualmente por lo menos el dos por ciento del financiamiento público que reciba para el desarrollo de las actividades específicas, a que se refiere el inciso c) de este artículo.

- Para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, cada partido político deberá destinar anualmente, el tres por ciento del financiamiento público ordinario.

c) Por actividades específicas como entidades de interés público:

- La educación y capacitación política, investigación socioeconómica y política, así como las tareas editoriales de los partidos políticos nacionales, serán apoyadas mediante financiamiento público por un monto total anual equivalente al tres por ciento del que corresponda en el mismo año para las actividades ordinarias a que se refiere el inciso a) de este artículo; el monto total será distribuido en los términos establecidos en la fracción II del inciso antes citado.
- El Consejo General, a través de la Unidad Técnica, vigilará que éstos destinen el financiamiento a que se refiere el presente inciso exclusivamente a las actividades señaladas en la fracción inmediata anterior.
- Las cantidades que en su caso se determinen para cada partido, serán entregadas en ministraciones mensuales conforme al calendario presupuestal que se apruebe anualmente.

XIX. Que el artículo 52 numerales 1 y 2, de la Ley General de Partidos Políticos, invoca que para que un partido político nacional cuente con recursos públicos locales deberá haber obtenido el tres por ciento de la votación válida emitida en el proceso electoral local anterior en la entidad federativa de que se trate. Las reglas que determinen el financiamiento local de los partidos que cumplan con lo previsto en el párrafo anterior se establecerán en las legislaciones locales respectivas.

XX. Que los artículos 23, fracción III, incisos a) y b), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 30 y 31 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales, establecen las reglas a que se sujetará el financiamiento para los Partidos Políticos y los candidatos independientes en las campañas electorales. El financiamiento público para los Partidos Políticos que mantengan su registro después de cada elección, se compondrá de las ministraciones destinadas al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, las de carácter específico y las tendientes a la obtención del voto

durante los Procesos Electorales. Se otorgará conforme a lo siguiente y a lo que disponga la Ley normativa de la materia:

- El financiamiento público del Estado para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el sesenta y cinco por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. El treinta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los Partidos Políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de Diputados inmediata anterior.
- El financiamiento público del Estado por actividades específicas, relativas a la educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales, equivaldrá al tres por ciento del monto total del financiamiento público que corresponda en cada año por actividades ordinarias. El treinta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los Partidos Políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de Diputados inmediata anterior.

El financiamiento público debe prevalecer sobre otros tipos de financiamiento y será destinado para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, gastos de procesos electorales y para actividades específicas como entidades de interés público.

XXI. Que los artículos 3, numeral 1, de la Ley General de Partidos Políticos en correlación al similar 21 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, señala que los partidos políticos son entidades de interés público, con personalidad jurídica y patrimonio propios, mismos que se rigen por la Ley General de Partidos Políticos, que determina las normas y requisitos para su registro, las formas específicas de su intervención en el proceso electoral, así como los derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponden, resultando aplicable, en lo conducente, lo dispuesto por el Código Local Electoral. Tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de estos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulen y mediante el sufragio universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible.

Además, en tratándose de asuntos de partidos políticos, la interpretación deberá tomar en cuenta el carácter de entidad de interés público de éstos como organización de ciudadanos, así como su libertad de decisión interna.

XXII. Que el artículo 27, primer párrafo, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece que los partidos políticos locales tendrán a su cargo las obligaciones que se les impongan en la Ley General de Partidos Políticos y las derivadas de las resoluciones que dicte el Consejo Estatal Electoral; asimismo el ordinal 28 del cuerpo legal invocado señala que el incumplimiento de las obligaciones señaladas en la normativa, se sancionará en los términos que correspondan a cada caso.

XXIII. De conformidad con el artículo 30, inciso d), del Código Electoral Local, establece lo siguiente:

CAPÍTULO I

DEL FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

Artículo *30. El financiamiento público para los partidos políticos que mantengan su registro después de cada elección, se compondrá de las ministraciones destinadas al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, las de carácter específico y las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales. Se otorgará conforme a lo siguiente y a lo que disponga la normativa de la materia:

...

d) Para actividades de la Representación Política ante el Consejo Estatal, los partidos políticos acreditados ante el Consejo Estatal percibirán de forma anual, en ministraciones mensuales, una prerrogativa de representación política ante los órganos electorales que equivaldrá al **seis por ciento adicional del monto total correspondiente al financiamiento** por concepto de actividades ordinarias permanentes del ejercicio de que corresponda. Los partidos políticos locales que hubieren obtenido su registro con fecha posterior a la última elección, o aquellos que habiendo conservado registro legal no cuenten con representación en el Congreso local, tendrán derecho a que se les otorgue financiamiento público conforme a las bases siguientes:

I. Se le otorgará a cada partido político el dos por ciento del monto que por financiamiento total les corresponda a los partidos políticos para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes a que se refiere este artículo, así como, en el año de la elección de que se trate, el financiamiento para gastos de campaña que corresponda con base en lo dispuesto en el inciso a) del presente artículo, y

II. Participarán del financiamiento público para actividades específicas como entidades de interés público sólo en la parte que se distribuya en forma igualitaria.

Las cantidades a que se refiere la fracción I) del párrafo anterior serán entregadas en la parte proporcional que corresponda a la anualidad, a partir de la fecha en que surta efectos el registro y tomando en cuenta el calendario presupuestal aprobado para el año.

Énfasis añadido.

Por su parte el numeral 32, del mismo ordenamiento legal, dispone lo que a la letra se transcribe:

> **Artículo *32.** El Consejo Estatal aprobará el calendario presupuestal conforme al cual deberá ministrarse a los partidos políticos, el financiamiento por sus actividades ordinarias permanentes, por actividades específicas, actividades de representación política, y en año electoral para las actividades tendientes a la obtención del voto.
>
> El financiamiento público otorgado a cada partido político le será entregado al representante legalmente acreditado del partido de que se trate.

XIV. Que el artículo 68, fracciones I, II, III, VII y párrafo segundo, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, señala que el patrimonio del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana se integra, entre otros aspectos, por las partidas que con cargo al presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Morelos del ejercicio fiscal correspondiente le sean asignadas; las partidas que se asignen para la organización de los procesos electorales y para el financiamiento de los partidos políticos; las aportaciones, transferencias y subsidios que hagan a su favor las dependencias, entidades y organismos de gobierno en los ámbitos federal, estatal y municipal; así como todo aquello que legalmente determine el Consejo Estatal Electoral; de manera que para la administración del patrimonio del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, debe ajustarse a los principios de disciplina, racionalidad, transparencia y austeridad.

XXV. Que el artículo 79, fracciones II, III y XIV, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que dentro de las atribuciones de la Consejera Presidente del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, le compete remitir oportunamente al titular del Poder Ejecutivo, el anteproyecto de presupuesto de egresos de éste órgano electoral, una vez aprobado por el Consejo Estatal Electoral; vigilar el ejercicio del presupuesto de egresos asignado al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, así como el cumplimiento de los acuerdos adoptados por la Comisión Ejecutiva Permanente de Administración y Financiamiento.

XXVI. Que el artículo 98, fracciones I, II, V, XIII, XXIII, XXXII y XXXVIII, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que dentro de las atribuciones del Secretario Ejecutivo de este órgano electoral, le compete en lo general, auxiliar al Consejo Estatal Electoral, en la conducción, la administración y la supervisión para el desarrollo adecuado de los órganos directivos y técnicos

del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, teniendo el carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas y actos de administración y de dominio; auxiliar al Consejo Estatal Electoral, a la Consejera Presidenta y a los Consejeros Electorales en el ejercicio de sus atribuciones; coordinar y supervisar el cumplimiento de los programas y actividades del Instituto Morelense; dirigir y supervisar la administración y finanzas del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, con estricto apego a las partidas presupuestales asignadas al mismo; coordinar y supervisar el cumplimiento de los programas y actividades del Instituto Morelense; así como las demás que señale el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales, le asigne la Consejera Presidenta o el Consejo Estatal Electoral.

XXVII. Que el artículo 99 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, establece que el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, contará con las siguientes Direcciones Ejecutivas:

- ✓ Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos.
- ✓ Dirección Ejecutiva de Capacitación y Educación Electoral.
- ✓ Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento.

XXVIII. Que el artículo 102, fracciones I y VIII, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, refiere que son atribuciones de la Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento aplicar las políticas, normas y procedimientos para la administración de los recursos financieros y materiales del Instituto Morelense; establecer y operar los sistemas administrativos para el ejercicio y control presupuestales; ejercer y aplicar el presupuesto de egresos del Instituto Morelense conforme a los lineamientos y al Código de la materia; y suministrar a los partidos políticos el financiamiento público al que tengan derecho conforme a los lineamientos del citado Código electoral.

XXIX. Por cuanto hace al sistema normativo que prevé la Constitución Federal que rige para los partidos políticos con registro nacional y concretamente en materia de financiamiento público, precisó lo siguiente:

Del análisis de las fracciones I y II del artículo 41 constitucional, puede advertirse que se establece un sistema de normas en las que se instituyen lineamientos generales que rigen en nuestro sistema federal y que, por tanto, vinculan a las autoridades federales y a las estatales en su respectivo ámbito de competencias.

Dentro de este sistema normativo específicamente de la fracción I del artículo 41, constitucional, se desprenden los siguientes lineamientos generales:

a) Los partidos políticos son entidades de interés público.

b) La ley determinará las formas específicas en que los partidos políticos intervendrán en el proceso electoral.

c) Los partidos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones estatales y municipales.

d) Fines de los partidos políticos.

e) Afiliación libre e individual de los ciudadanos a los partidos políticos.

De los lineamientos generales precisados puede decirse que éstos norman lo inherente a todos los partidos políticos sin distingo alguno, esto es, son aplicables tanto para los partidos políticos con registro nacional como para los que cuentan con registro estatal; incluso, no puede considerarse que tales lineamientos sean propios para el ámbito federal o para el local, sino que comprende a ambos.

En efecto, en primer lugar la naturaleza de interés público de los partidos políticos es inherente a cualquier partido y no es exclusivo de alguno en función del tipo de registro con que cuenten (nacional o estatal).

En segundo lugar, en cuanto a la remisión que se hace a la ley para establecer la intervención que tendrán los partidos en el proceso electoral respectivo, debe entenderse que se refiere a la ley que rija el respectivo proceso, es decir, a la ley federal o a la ley estatal según el tipo de proceso de que se trate.

En tercer lugar, por lo que hace al derecho de los partidos políticos nacionales para participar en las elecciones estatales y municipales, contiene un derecho en favor de los partidos que cuenten con registro nacional, pero, a su vez, implica un derecho y una prohibición para los partidos con registro estatal, ya que éstos podrán participar en las elecciones locales pero no así en las federales.

En cuarto lugar, se establecen los fines de los partidos políticos (promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo), dichos fines no son exclusivos de los partidos políticos con un tipo de registro determinado, sino que comprende tanto a los que cuenten con registro nacional como estatal.

En quinto lugar, el que los ciudadanos puedan afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos, no se refiere tampoco a un tipo determinado de partido, sino a cualquiera con independencia de que cuente con registro nacional o estatal.

De lo expuesto se sigue que en la fracción I, del artículo 41, constitucional se establecen lineamientos generales como parte de un sistema normativo en materia electoral y que, dada la naturaleza de tales disposiciones, debe concluirse que regulan lo inherente a todos los partidos políticos tanto en el ámbito federal o local, esto es, sean partidos con registro nacional o estatal, pues, de otra manera, de considerarse que sólo rigen en uno de estos ámbitos, se excluiría a unos u otros partidos sin justificación alguna, siendo que tales disposiciones contienen lineamientos de carácter general y que no están dirigidos expresamente a un ámbito determinado.

En lo tocante a la fracción II del artículo 41 constitucional, de igual manera debe considerarse que comprende un sistema general de normas que contiene reglas diversas, unas aplicables tanto en el ámbito federal como en el local, y otras expresamente dirigidas al ámbito federal. En el ámbito federal prevé reglas generales expresas aplicables para los partidos políticos con registro nacional a saber, las siguientes:

> ...
>
> II. La ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado.
>
> El financiamiento público para los partidos políticos que mantengan su registro después de cada elección, se compondrá de las ministraciones destinadas al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales y las de carácter específico. Se otorgará conforme a lo siguiente y a lo que disponga la ley:
>
> a) El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el sesenta y cinco por ciento del salario mínimo diario vigente para el Distrito Federal. El treinta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior.
>
> b) El financiamiento público para las actividades tendientes a la obtención del voto durante el año en que se elijan Presidente de la República, senadores y diputados federales, equivaldrá al cincuenta por ciento del financiamiento público que le corresponda a cada partido político por actividades ordinarias en

> ese mismo año; cuando sólo se elijan diputados federales, equivaldrá al treinta por ciento de dicho financiamiento por actividades ordinarias.
>
> c) El financiamiento público por actividades específicas, relativas a la educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales, equivaldrá al tres por ciento del monto total del financiamiento público que corresponda en cada año por actividades ordinarias. El treinta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior.
>
> La ley fijará los límites a las erogaciones en los procesos internos de selección de candidatos y en las campañas electorales. La propia ley establecerá el monto máximo que tendrán las aportaciones de sus militantes y simpatizantes; ordenará los procedimientos para el control, fiscalización oportuna y vigilancia, durante la campaña, del origen y uso de todos los recursos con que cuenten; asimismo, dispondrá las sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de estas disposiciones.
>
> De igual manera, la ley establecerá el procedimiento para la liquidación de las obligaciones de los partidos que pierdan su registro y los supuestos en los que sus bienes y remanentes serán adjudicados a la Federación.
>
> ...

Ahora bien, si bien tales lineamientos generales se establecen en la fracción II, expresamente con relación a los partidos nacionales y que, por ende, rigen en el ámbito federal, también lo es que dichas disposiciones son de observarse en el ámbito local para este tipo de partidos, toda vez que éstos tienen derecho a participar no solamente en las elecciones federales sino igualmente en las estatales y municipales, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del propio artículo 41 constitucional.

Por lo tanto, aunque la fracción II, del numeral 41 de la Carta Magna, refiere expresamente en su inicio a los partidos nacionales, también lo es que de una interpretación armónica y sistemática de dicho numeral, se llega a la conclusión de que los lineamientos generales que en la referida fracción se contienen resultan aplicables para dichos partidos tanto en el ámbito federal como en el local; sin embargo, debe precisarse que tal aplicación debe ser congruente con el tipo de elección de que se trate, sea federal o local, pues si bien son propias en su integridad para el ámbito federal, también lo es que no todas son congruentes con el ámbito local, por lo que sólo en lo que resulten aplicables deberán regir en el ámbito local en que participe el partido nacional.

Por otra parte, el artículo 116 de la Constitución Federal establece expresamente un marco normativo para los Estados, confiriéndoles facultades expresas en su régimen interior; en lo que interesa, en la fracción IV del referido precepto

fundamental, se establecen los principios que las constituciones y leyes de los Estados deben garantizar en materia electoral.

Dichas garantías se refieren a los procesos para la elección de los gobernadores de los Estados, de los miembros de las legislaturas locales y de los integrantes de los ayuntamientos; a la función de las autoridades electorales, su autonomía e independencia; al establecimiento de un sistema de medios de impugnación; a la fijación de plazos para el desahogo de las instancias impugnativas y del principio de definitividad en éstas; al financiamiento público para el sostenimiento de las actividades permanentes de los partidos políticos y durante los procesos electorales; al acceso de los partidos políticos a los medios de comunicación social; a la fijación de límites a las derogaciones los partidos políticos y de los montos de las aportaciones de sus simpatizantes, así como para su control y vigilancia y la previsión de sanciones por incumplimiento; y, a la tipificación de los delitos y faltas en materia electoral y sus sanciones.

Ahora bien, de lo previsto por los artículos 41, fracciones I y II y 116, fracción IV, de la Constitución Federal, se concluye que en dichas disposiciones se establece un sistema normativo en el que se fijan lineamientos generales que rigen en materia electoral federal y en el local en su respectivo ámbito, y que algunas de estas disposiciones obligan para cualquier partido con independencia del registro con que cuenten (nacional o estatal) y algunas otras sólo operan para unos o para otros según el tipo de elección de que se trate (federal o local).

Por su parte el artículo 23, numeral 1, de la Ley General del Partidos Políticos determina:

> ...
>
> Son derechos de los partidos políticos:
>
> a) Participar, conforme a lo dispuesto en la Constitución y las leyes aplicables, en la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral;
>
> b) Participar en las elecciones conforme a lo dispuesto en la Base I del artículo 41 de la Constitución, así como en esta Ley, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y demás disposiciones en la materia;
>
> c) Gozar de facultades para regular su vida interna y determinar su organización interior y los procedimientos correspondientes;
>
> d) Acceder a las prerrogativas y recibir el financiamiento público en los términos del artículo 41 de la Constitución, esta Ley y demás leyes federales o locales aplicables.
>
> En las entidades federativas donde exista financiamiento local para los partidos políticos nacionales que participen en las elecciones locales de la entidad, las leyes locales no podrán establecer

> limitaciones a dicho financiamiento, ni reducirlo por el financiamiento que reciban de sus dirigencias nacionales".
>
> ...

De igual manera el artículo 52 de la ley General de Partidos Políticos, establece lo siguiente:

> ...
>
> 1. Para que un partido político nacional cuente con recursos públicos locales deberá haber obtenido el tres por ciento de la votación válida emitida en el proceso electoral local anterior en la entidad federativa de que se trate.
>
> 2. Las reglas que determinen el financiamiento local de los partidos que cumplan con lo previsto en el párrafo anterior se establecerán en las legislaciones locales respectivas.
>
> ...

En efecto, de las disposiciones constitucionales y legales anteriormente citadas se desprende que los Estados, a través de su constitución estatal y sus respectivas leyes, deben garantizar dicho principio rector, pero sin que imponga reglamentación específica al respecto, de tal manera que deja a discreción de las entidades la determinación de las formas y mecanismos legales correspondientes, tendentes a buscar una situación equitativa entre los partidos políticos en cuanto al financiamiento para la realización de sus actividades y fines.

Sobre el particular, resultan aplicables de forma analógica en lo conducente, las siguientes jurisprudencias pronunciadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

> Época: Novena Época
>
> Registro: 181511
>
> Instancia: Pleno
>
> Tipo de Tesis: Jurisprudencia
>
> Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
>
> Tomo XIX, Mayo de 2004
>
> Materia(s): Constitucional
>
> Tesis: P./J. 29/2004
>
> Página: 1156
>
> **PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES. EL ARTÍCULO 30, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL, QUE CONDICIONA SU ACCESO AL FINANCIAMIENTO PÚBLICO, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD EN MATERIA ELECTORAL.** El artículo 122, apartado C, base primera, fracción V, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal podrá expedir las disposiciones que rijan las elecciones locales de esa entidad, sujetándose a las bases que establezca el Estatuto de Gobierno, las cuales tomarán en cuenta los principios rectores contenidos en los incisos b) a i) de la fracción IV del

artículo 116 de la propia Constitución Federal, entre ellos, el de equidad. En esa tesitura, el artículo 121 del mencionado Estatuto dispone que los partidos políticos recibirán, en forma equitativa, financiamiento público para su sostenimiento. Ahora bien, el hecho de que el artículo 30, párrafo primero, del Código Electoral del Distrito Federal, establezca que los partidos políticos que por sí mismos hubieren obtenido por lo menos el 2% de la votación total emitida en la elección de diputados a la Asamblea Legislativa por el principio de representación proporcional, tendrán derecho al financiamiento público de sus actividades, no viola el mencionado principio, pues, por una parte, se da un trato igual a todos aquellos partidos políticos que se encuentren en la misma situación, ya que los que no alcancen la votación mínima requerida no tendrán derecho al financiamiento público y, por otra, aun cuando los partidos políticos conserven su registro nacional, lo cierto es que si no tienen a nivel local (Distrito Federal) representatividad, al no haber alcanzado el porcentaje mínimo, es evidente que no están en situación igual a aquellos que sí obtuvieron ese porcentaje, de manera que en atención a que se trata de recursos locales y no federales, es indudable que los partidos políticos que contiendan en las elecciones del Distrito Federal, con independencia de que cuenten con registro nacional, deben estar a las disposiciones locales, las cuales al aplicar las mismas reglas a los partidos que participan en el mismo ámbito local, cumplen con el principio de equidad en materia electoral. Además, conforme al artículo 41 de la Constitución Federal, los partidos políticos son entidades de interés público y tienen como fines promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público; de ahí que se instituya en las disposiciones fundamentales, el otorgamiento de financiamiento público para que logren tales fines; sin embargo, por la misma razón, si dentro del ámbito local, los partidos beneficiados con este tipo de financiamiento no logran una representatividad significativa para el logro de los fines que persiguen, no se justifica el acceso al financiamiento público.

Época: Novena Época

Registro: 191106

Instancia: Pleno

Tipo de Tesis: Jurisprudencia

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo XII, Septiembre de 2000

Materia(s): Constitucional

Tesis: P./J. 94/2000 Página: 399

EQUIDAD EN MATERIA ELECTORAL. EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, REFORMADO POR DECRETO PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD, EL DIEZ DE ABRIL DE DOS MIL, QUE ESTABLECE LAS REGLAS GENERALES PARA DISTRIBUIR EL FINANCIAMIENTO PÚBLICO ESTATAL ANUAL ENTRE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES QUE OBTENGAN SU REGISTRO COMO TALES, NO CONTRAVIENE DICHO PRINCIPIO.

La equidad en el financiamiento público a los partidos políticos que como principio rector en materia electoral establece el artículo 116, fracción IV, inciso f), de la Constitución Federal, estriba en el derecho igualitario consignado en la ley para que todos los partidos políticos puedan llevar a cabo la realización de sus actividades ordinarias y las relativas a la obtención del sufragio universal, atendiendo a las circunstancias propias de cada partido político, de tal manera que cada uno perciba lo que proporcionalmente le corresponde acorde con su grado de representatividad. En estas condiciones, el artículo 28 de la citada Ley Electoral del Estado de Aguascalientes que prevé el derecho de los partidos políticos nacionales acreditados ante el Consejo Estatal Electoral para que se les ministre financiamiento público estatal anual para el sostenimiento de sus actividades permanentes y para gastos de campaña, tomando en consideración las circunstancias particulares de cada partido y su grado de representatividad, no contraviene el principio rector de referencia. Ello es así, porque el citado artículo 28, al establecer las reglas para la distribución del aludido financiamiento, otorga a los partidos políticos que hayan obtenido su registro ante el referido consejo, con posterioridad al último proceso electoral local, un tratamiento distinto a aquellos que ya cuentan con antecedentes electorales y que tienen elementos objetivos que permiten determinar con certeza el grado de representatividad que tienen, esto es, proporciona un trato equitativo a los partidos que se encuentran en igualdad de circunstancias y uno distinto a los que se ubican en una situación diferente.

Época: Novena Época

Registro: 164740

Instancia: Pleno

Tipo de Tesis: Jurisprudencia

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo XXXI, Abril de 2010

Materia(s): Constitucional

Tesis: P./J. 39/2010

Página: 1597

PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES. CONFORME A LOS ARTÍCULOS 41, BASE I, Y 116, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LOS ESTADOS TIENEN PLENA LIBERTAD PARA ESTABLECER LAS NORMAS Y LOS REQUISITOS PARA SU REGISTRO, ASÍ COMO LAS FORMAS ESPECÍFICAS PARA SU INTERVENCIÓN EN LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES.

El indicado artículo 41, base I, reconoce a los partidos políticos como entidades de interés público, con funciones y finalidades constitucionalmente asignadas, por lo que ante el papel que deben cumplir en el Estado constitucional democrático de derecho, el orden jurídico establece una serie de prerrogativas y derechos de carácter electoral en su favor. En el mismo sentido, prevé la facultad del legislador ordinario, ya sea federal o local, para determinar las normas y los requisitos para el registro legal de los partidos políticos y las formas específicas de su intervención en el proceso electoral, de ahí que los partidos políticos nacionales pueden participar tanto en las

> elecciones federales como en las locales, pero su intervención en estas últimas está sujeta a las disposiciones legales que para esos procesos establezcan los legisladores locales. Por su parte, el artículo 116, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé el imperativo para que las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral garanticen ciertos principios en la materia. En ese sentido, de la interpretación sistemática de los artículos 41, base I y 116, fracción IV, de la Constitución General de la República, se concluye que los Estados tienen plena libertad para establecer las normas y los requisitos para el registro legal de los partidos políticos nacionales, así como las formas específicas para su intervención en los procesos electorales locales, es decir, a los Estados corresponde imponer las modalidades y formas de participación de los partidos políticos nacionales en las elecciones locales, ponderando sus necesidades y circunstancias políticas. Sin embargo, esta libertad está condicionada a que se respeten los principios contenidos en la fracción IV del indicado artículo 116 y a que se regulen conforme a criterios de razonabilidad guiados por el propósito de que los partidos políticos, como entidades de interés público, cumplan con las finalidades constitucionales que tienen encomendadas.

XXX. CRITERIO ADOPTADO POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS EN LA SENTENCIA TEEM/REC/04/2023-1. Resulta importante mencionar en la presente determinación el acuerdo emitido por el Tribunal Electoral del Estado de Morelos al emitir sentencia el cinco de julio de dos mil veintitrés en el recurso de reconsideración **TEEM/REC/04/2023-1**, en la que confirmó el acuerdo **IMPEPAC/CEE/108/2023**, emitido por el Consejo Estatal Electoral del IMPEPAC, por el cual en cumplimiento a la diversa sentencia de fecha ocho de mayo, dictada en autos de los recursos de reconsideración **TEEM/REC/01/2013-1 y acumulado**, aprobó la distribución del financiamiento público asignado a los partidos políticos con registro acreditados ante este Instituto, para el sostenimiento de actividades específicas, así como la correspondiente a la prerrogativa señalada en el ordinal 30, inciso d), del Código Local para el ejercicio fiscal del año dos mil veintitrés, en dicha resolución el órgano jurisdiccional analiza el financiamiento público para actividades de representación política, en los siguientes términos:

> […]
> • **Una prerrogativa para las actividades de los Representantes de los partidos políticos acreditados ante el Consejo Estatal, la cual se percibirán de forma anual en ministraciones mensuales, y que equivaldrá al seis por ciento (6%) adicional del monto total correspondiente al financiamiento por concepto de actividades ordinarias permanentes del ejercicio de que corresponda.**
>
> … en numerario, consistente en el apoyo que se otorga a los representantes de los partidos políticos para el desempeño de su trabajo.
>
> Asimismo, el financiamiento **para gastos de representación política tiene como finalidad permitir que los representantes de los partidos políticos desarrollen adecuadamente las funciones a que se refiere los artículos 75 del Código Electoral y el 7 del Reglamento de Sesiones del Consejo Estatal del IMPEPAC.**
>
> …
>
> Por otro lado, el fin legal del financiamiento público para actividades de representación político consiste, como se expuso con antelación, **en que los partidos**

políticos con acreditación local puedan vigilar y verificar el desarrollo del proceso electoral local y las actividades al interior del IMPEPAC, para la cual el legislador local consideró necesario que sus representantes ante su Consejo Estatal reciban un apoyo económico para el mejor desarrollo de las actividades propias de la representación que ostentan, mediante las ministraciones mensuales correspondientes.

En este orden de ideas, este Tribunal Comicial advierte que los tipos de financiamiento público de referencia, persiguen fines de diversa entidad, ya que el primero tiende a que los partidos políticos con acreditación local puedan cubrir sus gastos operativos y de funcionamiento de manera regular, lo que hace razonable que entre mayor sea el grado de representatividad que cada uno tuviera en relación con los ciudadanos votantes, por ende. deberían de obtener mayores recursos, ya que podrían atender las necesidades de su base electoral con los mismos recursos económicos que un partido con una representatividad menor; mientras que el segundo, **únicamente constituye un tipo de apoyo económico que debe amortizarse o entregarse a los representantes de los partidos políticos, con la finalidad de que estos integren los órganos internos del IMPEPAC, mediante su asistencia a las sesiones respectivas, con la finalidad de vigilar la actividad administrativa del IMPEPAC que pudiera perjudicar a sus representados.**

Respecto de lo últimamente referido, resulta pertinente señalar que del ordinal 71 del Código Electoral se desprende, que el Consejo Estatal se integra además de con el Consejero Presidente, los seis Consejeros Electorales y el Secretario Ejecutivo del IMPEPAC, **con cada uno de los representantes por cada partido político**, lo que implica que en el financiamiento público para actividades de representación política no incide la cuestión relacionado con la representatividad de la base electoral de cada uno de los partidos, sino **con su representatividad al interior del Consejo Estatal**, la cual como puede advertirse resulta estrictamente igualitaria.
[...]

El énfasis es nuestro.

Cabe mencionar que dicha sentencia fue confirmada por la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en autos del expediente **SCM-JRC-13/2023** emitida el día treinta de agosto de dos mil veintitrés, en dicha sentencia, el órgano jurisdiccional federal formuló las siguientes consideraciones:

[...]
Conforme a ello, esta Sala Regional **procede a identificar las normas en las que se contemplan las actividades** de representación que deben ser sufragadas con el financiamiento público en cuestión (financiamiento para actividades de representación política).

El artículo 71 fracción IV del Código Local establece que el Consejo Estatal se integra por:

- Un consejero(a) presidente(a).
- Seis consejeros o consejeras Electorales.
- Un secretario(a) ejecutivo(a), y
- **Una o un representante por cada partido político con registro o coalición.**

La persona acreditada por cada partido político con registro o coalición podrá designar representaciones propietarias y suplentes y **tendrán derecho a voz durante las sesiones de dicho órgano**.

Como atribuciones del Consejo Estatal respecto de la representación de los institutos políticos, el artículo 78 fracción VII del Código local dispone que debe convocar a los partidos políticos para que nombren a las personas que los representen, propietarias y suplentes.

Es importante precisar que el artículo 78 en cita, en su fracción XXII establece como obligación del Instituto local proporcionar en forma equitativa a los partidos políticos, **el uso de instalaciones y los instrumentos de trabajo necesarios para que las personas representantes acreditadas estén en condiciones de cumplir con las**

funciones que le son propias dentro de los organismos electorales, los que dispondrán de un espacio propio, de papelería y equipos de oficina básicos, para realizar sus trabajos dentro de las instalaciones del órgano local.

De igual forma, en el artículo 85 del Código local se prevé que las personas **representantes de los institutos políticos podrán participar con derecho a voz en las comisiones** temporales que se formen al interior del Consejo Estatal.

En su artículo 118 se estipula la obligación que tienen tanto partidos políticos como personas candidatas independientes, de acreditar a quienes les representen ante el Consejo Estatal, los consejos distritales y municipales electorales, en la fecha de instalación del consejo respectivo.

En aspectos procesales, el artículo 323 del Código Local dispone que la interposición de los medios de defensa en el ámbito estatal corresponde a los partidos políticos, a través de las personas representantes acreditadas ante los organismos electorales, y que quien cuente con la representación ante el Consejo Estatal, para interponer todos los recursos previstos en dicho código tratándose de registro de candidaturas.

En ese orden de ideas, es trascendente precisar que según el artículo 324 fracción I del Código Local, se tiene como personas representantes legítimas de los partidos políticos, a quienes cuenten con acreditación formal ante los organismos electorales estatales.

Por otra parte, el mismo ordenamiento en su artículo 29 establece que, las y los representantes de los partidos políticos locales son responsables civil, administrativa y penalmente de los actos que realicen en el ejercicio de sus funciones, en términos de la normativa aplicable.

Así, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, en correlación con el Código Local, se desprende que las actividades de representación son gastos de carácter permanente inherentes a las personas que se encuentran debidamente acreditadas ante los órganos electorales.

De esta forma, esta Sala Regional considera que los gastos de representación ante los órganos electorales implican el pago de gastos a las personas que están debidamente acreditadas ante ellos.

Conforme a lo anterior, **no le asiste razón a MORENA** cuando argumenta que las actividades de representación política deben ser entendidas de forma más genérica y **no solo las relativas a las representaciones acreditadas ante el Consejo Estatal.**

Al respecto, el Tribunal Local señaló que el financiamiento público para actividades de representación política tiene como finalidad permitir que las y los representantes de los partidos políticos desarrollen adecuadamente las funciones a que se refieren los artículos 75 del Código Local y el 7 del Reglamento de Sesiones del Consejo Estatal del IMPEPAC.

[...]

El énfasis es nuestro.

Del criterio antes vertido, se deduce que el financiamiento destinado a la representación política contemplado en el artículo 30, inciso d) del Código Electoral Local, se encuentra intrínsecamente vinculado a los representantes partidarios y a sus actividades al interior del Consejo Estatal Electoral del IMPEPAC.

XXXI. MODIFICACIÓN DEL CALENDARIO PRESUPUESTAL DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS PARA ACTIVIDADES DE REPRESENTACIÓN POLÍTICA ANTE EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL. Este Consejo Estatal Electoral **aprueba** la modificación del calendario presupuestal para actividades de representación política ante el Consejo Estatal Electoral derivado de la acreditación de representantes propietarios y suplentes ante el órgano colegiado, del **partido político nacional Somos,** para de los meses de septiembre

a diciembre del año dos mil veintiséis con el fin que el instituto político cuente con la prerrogativa que dispone el artículo 30, inciso d) del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos.

Lo anterior al tomar en consideración que el 6% del financiamiento público que dispone la norma de referencia equivale a **$ 6, 946, 844.65 (seis millones novecientos cuarenta y seis mil ochocientos cuarenta y cuatro pesos 65/10 M.N.)**, el cual se ha distribuido de la siguiente forma:

- Acuerdo IMPEPAC/CEE/002/2026 el total de financiamiento erogado de los meses de enero a junio fue por el monto de $3, 473,422.32 (tres millones cuatrocientos setenta y tres mil cuatrocientos veintidós pesos 32/100 M.N.)
- Acuerdo IMPEPAC/CEE/218/2026, el total de financiamiento erogado del mes de julio, por el monto de $578,903.72 (quinientos setenta y ocho mil novecientos tres pesos 72/100 M.N.)

La distribución de la prerrogativa se realiza de forma igualitaria entre todos los institutos políticos que tengan acreditación ante el Consejo Estatal Electoral, por lo que tomando en consideración la acreditación de la representación del partido político nacional Somos, resulta necesario modificar la distribución en el mes de septiembre del presente año.

Se precisa que de conformidad con el acuerdo **IMPEPAC/CEE/239/2026**, el partido político nacional Somos, no se consideró al partido Somos en dicha redistribución, derivada de la designación de representantes ante el Consejo Estatal Electoral del partido político nacional **PAZ**, por lo cual para el mes de agosto se había considerado una distribución de **$52,627.61** (cincuenta y dos mil seiscientos veintisiete pesos 61/100 M.N.) entre los once partidos que al momento de la emisión del acuerdo estaban acreditados ante el Consejo Estatal Electoral.

Por lo anterior, debido a que no se encontraba incluido el partido político nacional Somos, se debe considerar para la distribución del mes de septiembre, por lo cual se generó una diferencia de $4,385.63 (cuatro mil trescientos ochenta y cinco pesos 63/100 M.N.), entre lo asignado en el mes de agosto por lo cual se aprueba realizar los ajustes en el mes de septiembre.

Ahora bien, respecto del partido político nacional Somos toda vez que no fue incluido en la distribución efectuada para el mes de agosto, en septiembre deberán cubrirse ambos meses por la cantidad de **$96, 483.95 (noventa y seis mil cuatrocientos ochenta y tres pesos 95/100 M.N.)**, por lo que dicha modificación no implica un incremento en el monto anual autorizado, sino sólo la redistribución

entre los doce partidos políticos que cuentan con acreditación ante el Consejo Estatal Electoral.

En consecuencia, este Consejo Estatal Electoral, **aprueba** la modificación del calendario presupuestal del financiamiento público a los partidos políticos para actividades de representación política ante el Consejo Estatal Electoral para el ejercicio 2026, en términos del **ANEXO ÚNICO** que corre agregado al presente acuerdo y forma parte integral del mismo.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 41, Bases II párrafo segundo inciso a) y c), III, apartado A y B, V, apartados B y C y 116, segundo párrafo, fracción IV, incisos a), b) y c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25, 99; 23 párrafo primero, fracción III, incisos a) y b), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 3, numeral 1, 9, numeral 1, incisos a) y b), 10, numeral 1, 23, párrafo 1, inciso d) y l), 25, numeral 1, incisos n) y u), y 26, párrafo 1, inciso b), 50, numerales 1 y 2, 51, numerales 1, incisos a) y c), 2 incisos a) y b) y 3, 52 numerales 1 y 2, de la Ley General de Partidos Políticos; 1, 5, 21, 27, párrafo segundo, 28, 30, inciso d), 31, 32, 63, párrafo tercero, 68 fracciones I, II, III, VII y segundo párrafo,69 fracción I, 71, 79 fracciones II, III y XIV, 98 fracciones I, II, V, XIII, XXIII, XXXII y XXXVIII, 99, 102, fracciones I y VIII, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos; este **Consejo Estatal Electoral**, emite el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO. Este **Consejo Estatal Electoral**, es **competente** para aprobar el presente acuerdo, en términos de la parte considerativa del mismo.

SEGUNDO. Se **aprueba** la modificación del calendario presupuestal del financiamiento público a los partidos políticos para actividades de representación política ante dicho órgano colegiado para el ejercicio 2026, derivado de la acreditación de representantes ante el Consejo Estatal Electoral, del partido político nacional Somos, en términos del **ANEXO ÚNICO**, que forma parte integral del presente acuerdo.

TERCERO. Se **instruye** a la Secretaria Ejecutiva para que remita el presente acuerdo en copia certificada al **Tribunal Electoral del Estado de Morelos**, en autos del recurso de reconsideración **TEEM/REC/25/2026-2.**

CUARTO. Se **instruye** a la Secretaria Ejecutiva, para que **notifique** el presente acuerdo a los partidos políticos con acreditación ante el Consejo Estatal Electoral, conforme a derecho corresponda.

QUINTO. Se **instruye** a la Secretaria Ejecutiva para que **publique** el presente acuerdo en la página oficial del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, en atención al principio de máxima publicidad.

El presente acuerdo es aprobado por **mayoría** de las Consejeras y los Consejeros Electorales: con los votos a favor del Consejero Mtro. Pedro Gregorio Alvarado Ramos, de la Consejera Mtra. Elizabeth Martínez Gutiérrez con voto concurrente, de la Consejera Mtra. Mayte Casalez Campos, de la Consejera Mtra. María del Rosario Montes Álvarez y del Consejero Ing. Víctor Manuel Salgado Martínez; así como con los votos en contra y particulares de la Consejera Presidenta Mtra. Mireya Gally Jordá y del Consejero Mtro. Adrián Montessoro Castillo, en sesión extraordinaria del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, celebrada en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, el día catorce de septiembre del año dos mil veintiséis, siendo las trece horas con cinco minutos.

MTRA. MIREYA GALLY JORDÁ
CONSEJERA PRESIDENTA

MTRA. MÓNICA SÁNCHEZ LUNA
SECRETARIA EJECUTIVA

CONSEJERÍAS ELECTORALES

MTRO. PEDRO GREGORIO ALVARADO RAMOS
CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ELIZABETH MARTÍNEZ GUTIÉRREZ
CONSEJERA ELECTORAL

MTRA. MAYTE CASALEZ CAMPOS
CONSEJERA ELECTORAL

MTRA. MARÍA DEL ROSARIO MONTES ÁLVAREZ
CONSEJERA ELECTORAL

MTRO. ADRIÁN MONTESSORO CASTILLO
CONSEJERO ELECTORAL

ING. VÍCTOR MANUEL SALGADO MARTÍNEZ
CONSEJERO ELECTORAL

REPRESENTACIONES DE PARTIDOS

LIC. JOANY GUADALUPE MONGE REBOLLAR
REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

LIC. CHRISTIAN GALLARDO GÓMEZ
REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

LIC. LAURA ELVIRA JIMÉNEZ SÁNCHEZ
REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO

LIC. ALBERTO ALEXANDER ESQUIVEL OCAMPO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO

LIC. OMAR DAMIÁN GONZÁLEZ
REPRESENTANTE DEL PARTIDO MORENA

LIC. OSCAR JIRAM VÁZQUEZ ESQUIVEL
REPRESENTANTE DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA MORELOS

C. JESÚS MARTÍNEZ DORANTES
REPRESENTANTE DEL PARTIDO PAZ

C. SALVADOR NAVARRO MARTÍNEZ
REPRESENTANTE DEL PARTIDO SOMOS

C. DIANA LAURA NAVA VERDEJO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO BAJO LA DENOMINACIÓN PROVISIONAL BIENESTAR CIUDADANO

IMPEPAC/CEE/280/2026

CALENDARIO PRESUPUESTAL DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS PARA ACTIVIDADES DE REPRESENTACIÓN POLÍTICA ANTE EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 2026

6% de financiamiento ordinario correspondiente al financiamiento por actividades de representación.	Conforme al Decreto Novecientos Noventa y Ocho, públicado en el periódico oficial "Tierra y Libertad" 6502.
	6,946,844.65

Total de financiamiento erogado de los meses de Enero a Junio en términos del acuerdo IMPEPAC/CEE/002/2026	Total del Financiamiento erogado del mes de Julio, en términos del acuerdo IMPEPAC/CEE/218/2026	Total del Financiamiento pendiente de distribución a partir del mes de Agosto, considerando la acreditación del Partido Político Nacional PAZ
3,473,422.32	578,903.72	2,894,518.61

El total se divide en 12 mensualidades que serán entregadas a los Partidos Políticos, conforme al artículo 30 del Código Local

Partido político	Total de los meses de Enero a Junio 2026	Total del mes de Julio 2026	Total de los meses de Agosto a Diciembre 2026	TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO CONFORME IMPEPAC/CEE/239/2026	AGOSTO CONSIDERANDO AL PARTIDO POLÍTICO NACIONAL CON DENOMINACIÓN PROVISIONAL SOMOS MÉXICO	DIFERENCIA AGOSTO	SEPTIEMBRE AJUSTADO	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
PAN	$385,935.84	$57,890.37	$241,209.88	$685,036.09	64,322.64	64,322.64	64,322.64	64,322.64	64,322.64	64,322.64	57,890.37	52,627.61	48,241.98	4,385.63	43,856.34	48,241.98	48,241.98	48,241.98	685,036.09
PRD	$385,935.84	$57,890.37	$241,209.88	$685,036.09	64,322.64	64,322.64	64,322.64	64,322.64	64,322.64	64,322.64	57,890.37	52,627.61	48,241.98	4,385.63	43,856.34	48,241.98	48,241.98	48,241.98	685,036.09
PVEM	$385,935.84	$57,890.37	$241,209.88	$685,036.09	64,322.64	64,322.64	64,322.64	64,322.64	64,322.64	64,322.64	57,890.37	52,627.61	48,241.98	4,385.63	43,856.34	48,241.98	48,241.98	48,241.98	685,036.09
PT	$385,935.84	$57,890.37	$241,209.88	$685,036.09	64,322.64	64,322.64	64,322.64	64,322.64	64,322.64	64,322.64	57,890.37	52,627.61	48,241.98	4,385.63	43,856.34	48,241.98	48,241.98	48,241.98	685,036.09
MOVIMIENTO CIUDADANO	$385,935.84	$57,890.37	$241,209.88	$685,036.09	64,322.64	64,322.64	64,322.64	64,322.64	64,322.64	64,322.64	57,890.37	52,627.61	48,241.98	4,385.63	43,856.34	48,241.98	48,241.98	48,241.98	685,036.09
morena	$385,935.84	$57,890.37	$241,209.88	$685,036.09	64,322.64	64,322.64	64,322.64	64,322.64	64,322.64	64,322.64	57,890.37	52,627.61	48,241.98	4,385.63	43,856.34	48,241.98	48,241.98	48,241.98	685,036.09
PAZ	$0.00	No se le otorga al no tener representación ante el CEE	$241,209.88	$241,209.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,627.61	48,241.98	4,385.63	43,856.34	48,241.98	48,241.98	48,241.98	241,209.88
SOMOS	$0.00	No se le otorga al no tener representación ante el CEE	$241,209.88	$241,209.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,241.98	-48,241.98	96,483.95	48,241.98	48,241.98	48,241.98	241,209.88
NUEVA ALIANZA	$385,935.84	$57,890.37	$241,209.88	$685,036.09	64,322.64	64,322.64	64,322.64	64,322.64	64,322.64	64,322.64	57,890.37	52,627.61	48,241.98	4,385.63	43,856.34	48,241.98	48,241.98	48,241.98	685,036.09
MORENA	$385,935.84	$57,890.37	$241,209.88	$685,036.09	64,322.64	64,322.64	64,322.64	64,322.64	64,322.64	64,322.64	57,890.37	52,627.61	48,241.98	4,385.63	43,856.34	48,241.98	48,241.98	48,241.98	685,036.09
PRD MORELOS	$385,935.84	$57,890.37	$241,209.88	$685,036.09	64,322.64	64,322.64	64,322.64	64,322.64	64,322.64	64,322.64	57,890.37	52,627.61	48,241.98	4,385.63	43,856.34	48,241.98	48,241.98	48,241.98	685,036.09
BC	$0.00	$57,890.37	$241,209.88	$299,100.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,890.37	52,627.61	48,241.98	4,385.63	43,856.34	48,241.98	48,241.98	48,241.98	299,100.25
TOTAL	$3,473,422.32	$578,903.72	$2,894,518.61	6,946,844.65	578,903.72	578,903.72	578,903.72	578,903.72	578,903.72	578,903.72	578,903.72	578,903.72	578,903.72		578,903.72	578,903.72	578,903.72	578,903.72	6,946,844.65

NOTA La presente distribución se realiza de manera igualitaria entre los Partidos Políticos con registro, de conformidad con el artículo 30 inciso d) del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos

VOTO CONCURRENTE que formula **Elizabeth Martínez Gutiérrez**, Consejera Estatal Electoral e integrante del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, en relación al Punto 2 **(dos)** del Orden del Día, de la sesión extraordinaria de fecha **catorce de septiembre de dos mil veintiseis** y por el que, el Pleno del Consejo Estatal Electoral del Instituto en comento **aprobó** el ***"ACUERDO IMPEPAC/CEE/280/2026 QUE PRESENTA LA SECRETARÍA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA QUE EMANA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANCIAMIENTO, RELATIVO A LA MODIFICACIÓN DEL CALENDARIO PRESUPUESTAL CON DETALLE MENSUAL DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2026, QUE RECIBIRÁN LOS PARTIDOS POLÍTICOS PARA ACTIVIDADES DE REPRESENTACIÓN POLÍTICA ANTE EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, DERIVADO DE LA DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTES ANTE DICHO ÓRGANO COLEGIADO DEL PARTIDO POLÍTICO CON DENOMINACIÓN SOMOS"***; sin embargo, la suscrita, con fundamento en el párrafo segundo,[1] del artículo 39, del Reglamento de Sesiones del Consejo Estatal del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, emito un **voto concurrente**, en virtud de las siguientes consideraciones:

En efecto, el proyecto propone realizar la modificación del calendario presupuestal con detalle mensual que recibirán los partidos políticos para actividades de representación política ante este órgano electoral local derivado de la designación de representantes del partido político nacional ***"SOMOS"***; situación que se comparte en parte, porque coincido en que los partidos políticos nacionales y locales con nuevo registro tienen derecho a que les otorgue la prerrogativa de representación política; sin embargo, en este caso, considero que no se cuenta con la debida certeza de las personas que realizan la designación de sus representantes propietario y suplente cuenten con las facultades conforme a su normativa estatutaria, tal como se estimó en el acuerdo que resolvió sobre la procedencia de su acreditación del instituto político ante este órgano electoral local.

Como se desprende de los antecedentes, el veinticinco de julio de dos mil veintiséis, el Pleno del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aprobó la resolución que determinó la procedencia de solicitud de registro como partido político nacional a la Organización de la ciudadanía denominada "Personas Sumando en 2025, A.C." actualmente denominado ***"SOMOS"***.

---

[1] **Artículo 39.**
...
En el caso que la discrepancia de la Consejera o Consejero Electoral se centre exclusivamente en la parte argumentativa pero exista coincidencia en el sentido de la decisión final, podrá formular un Voto Concurrente respecto de la parte del Acuerdo o Resolución que fue motivo de su disenso.

Derivado de lo anterior, el siete de julio del año en curso, el partido político nacional SOMOS, por conducto de diversas personas, presentaron solicitud de acreditación del ente político ante el IMPEPAC, situación que se determinó como procedente a través del acuerdo **IMPEPAC/CEE/217/2026**, el día nueve del mes y año ya citados; por lo que, en ese acuerdo mi voto fue en contra al estimar que se no tenía certeza para tomar tal decisión ya que el instituto político no había acompañado la documentación qué permitieran este órgano electoral reconocer conforme su norma estatutaria la personería de las personas que pretendían tener por acreditada al instituto político.

De igual manera, mediante el acuerdo **IMPEPAC/CEE/218/2026** a través del cual se aprobó la redistribución del financiamiento público asignado a los partidos políticos con registro acreditado ante este órgano comicial para el sostenimiento de actividades ordinarias y específicas, así como la prerrogativa señalada en el artículo 30, inciso d), del Código Comicial Vigente, para el ejercicio fiscal del año 2026, derivado de la creación de nuevos partidos políticos nacionales y locales; emití un voto concurrente, por estimar que el partido bajo la denominación "***SOMOS***" no debería ser contemplado en la redistribución de recurso locales al no existir certeza sobre la personalidad de los firmantes ni contar con documentación básica en el expediente local y no cumplir con los extremos de los Lineamientos del acuerdo **IMPEPAC/CEE/061/20217** para formalizar un registro ante este Instituto.

Derivado de lo anterior y con independencia de que en su oportunidad a consideración este órgano electoral no contaba con la documentación que acreditara la personería de las personas que solicitaron la acreditación del partido político bajo la denominación "SOMOS", si bien la intención es que dicho ente político se le proporcione la prerrogativa de representación política prevista en el artículo establecido en el inciso d) del artículo 30 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos; considero de igual manera, que ante la falta de certeza respecto a la calidad y facultades de dichas personas no podría tenerse por reconocida la acreditación de representantes y en consecuencia, no se estaría en posibilidad de proporcionarse la prerrogativa antes citada.

Lo anterior, porque si bien el artículo 23, numeral 1, inciso d) de la Ley General de Partidos Políticos establece la obligación de los institutos políticos el acceder a las prerrogativas y recibir el financiamiento público en los términos del artículo 41

de la Constitución, esta Ley y demás leyes federales o locales aplicables; también lo es, que para ello se encuentran obligados a conducir sus actividades dentro los cauces legales, siendo para ello necesario el de presentar toda la documentación estatutaria mediante el cual este órgano electoral local pueda revisar de manera completa la calidad de las personas que solicitaron en su oportunidad la acreditación de su partido a nivel local y de sus representantes ante el Pleno del Consejo Estatal Electoral.

De ahí que ante la falta documentación que permita corroborar la personería de las personas que promovieron la solicitud de acreditación se insiste que no podría compartir la propuesta que se nos presenta en forma completa.

Razón por la cual votare a favor del proyecto de acuerdo con la emisión de un voto concurrente.

ATENTAMENTE

ELIZABETH MARTÍNEZ GUTIÉRREZ
CONSEJERA ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Cuernavaca, Morelos; a 14 de septiembre de 2026.

VOTO PARTICULAR QUE FORMULA LA CONSEJERA PRESIDENTA DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, MTRA. MIREYA GALLY JORDÁ

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 39 del Reglamento de Sesiones del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC), formulo el presente voto particular respecto del acuerdo IMEPAC/CEE/280/2026, lo anterior; al tenor de lo siguiente:

I. ANTECEDENTES

a) El Consejo General del Instituto Nacional Electoral en su sesión extraordinaria de 25 de junio de 2026, aprobó la resolución INE/CG347/2026 mediante la cual, le otorgó el registro como Partido Político Nacional a la otrora organización de la ciudadanía denominada "Personas Sumando en 2025, A.C.", bajo la denominación provisional de "Partido Somos México".

b) En sesión extraordinaria de 14 de agosto de 2026, el Pleno del Consejo Estatal Electoral del IMPEPAC, aprobó por mayoría el acuerdo identificado con la clave alfanumérica IMPEPAC/CEE/239/2026; cuyo encabezado es *"ACUERDO QUE PRESENTA LA SECRETARÍA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA QUE EMANA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANCIAMIENTO, RELATIVO A LA MODIFICACIÓN DEL CALENDARIO PRESUPUESTAL CON DETALLE MENSUAL DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO A PARTIR DEL MES DE AGOSTO 2026, QUE RECIBIRÁN LOS PARTIDOS POLÍTICOS CON ACTIVIDADES DE REPRESENTACIÓN POLÍTICA ANTE EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, DERIVADO DE LA DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTES ANTE DICHO ÓRGANO COLEGIADO DEL PARTIDO POLÍTICO NACIONAL PAZ."*

c) En sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, del 31 de agosto de 2026, se aprobó la resolución INE/CG497/2026, a través de la que se declaró la procedencia constitucional y legal de la modificación del partido político nacional de "**SOMOS MÉXICO**" a "**SOMOS**", dispuesta en el artículo 1 de sus estatutos, en acatamiento a la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación al resolver el SUP-RAP-182/2026 y Acumulados.

II. DECISIÓN MAYORITARIA

En el Acuerdo **IMPEPAC/CEE/280/2026**, se modificó el calendario presupuestal con detalle mensual de financiamiento público, a partir del mes de septiembre para actividades de representación del partido político SOMOS, toda vez que, la procedencia de la acreditación de la persona representante propietaria del referido partido político nacional, se informó a través del oficio IMPEPAC/DEOYPP/JABV/433/2026, signado por el Director Ejecutivo de Organización y Partidos políticos del IMPEPAC, el pasado 26 de agosto de 2026.

No pasa desapercibido que, en la sesión extraordinaria de 09 de julio de 2026, se aprobó el acuerdo IMPEPAC/CEE/218/2026, a través del cual, se modificó el calendario presupuestal con detalle mensual a partir del mes de julio de 2026, con motivo de la acreditación de tres partidos políticos de nueva creación y su respectiva redistribución, lo anterior; conforme a lo establecido por el artículo 30 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos.

Hago constar que, en dicha sesión, la suscrita, no presidí ningún punto del orden del día, por lo cual, no participé en los actos deliberativos.

III. RAZONES DE DISCREPANCIA

Ahora bien, es necesario mencionar que, en el mes de julio de la presente anualidad, no existía acreditación alguna ante este Instituto Electoral Local por parte del partido político nacional SOMOS, sin embargo; de conformidad con lo mandatado por el artículo 19 numeral 2 de la Ley General de Partidos Políticos, el registro de los partidos políticos surtirá efectos constitutivos a partir del primer día del mes de julio del año previo al de la elección.

De ahí que, si bien este Instituto Electoral Local tiene la obligación de verificar que, los nombramientos de las representaciones de los partidos políticos cumplan a cabalidad con los requisitos de ley para su legal incorporación al Consejo Estatal Electoral del IMPEPAC, no pasa inadvertido que; el procedimiento de revisión para las acreditaciones de las representaciones de los partidos políticos ante el IMPEPAC, no puede equipararse bajo ninguna circunstancia, como un condicionamiento o requisito extra al otorgamiento de sus prerrogativas por concepto de actividades de representación política.

Donde la ley es clara, no se requieren interpretaciones, de ahí que, los efectos constitutivos que el artículo 19 de la Ley General de Partidos Políticos establece, son a partir del primero de julio, por tanto; no existe ningún otro requisito *sine qua non* para el otorgamiento de prerrogativas.

Sirve como criterio orientador, la tesis aislada con registro digital: 232511, cuyo rubro es: DERECHOS ADQUIRIDOS Y EXPECTATIVAS DE DERECHO, CONCEPTO DE LOS, EN MATERIA DE RETROACTIVIDAD DE LEYES[1], en donde se razonó que; el derecho adquirido se puede definir como el acto realizado que introduce un bien, una facultad o un provecho al patrimonio de una persona, y ese hecho no puede afectarse, ni por la voluntad de quienes intervinieron en el acto, ni por disposición legal en contrario.

Es por tanto que, una vez el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió la resolución en donde le otorgó el registro como Partido Político Nacional a SOMOS, en concatenación con el multicitado artículo 19 de la Ley General de Partidos Políticos, lo conducente es distribuir considerando de manera retroactiva las prerrogativas del mes de julio para el partido SOMOS.

Por todo lo expuesto con anterioridad, voté en contra del proyecto de acuerdo.

A T E N T A M E N T E

MTRA. MIREYA GALLY JORDÁ
CONSEJERA PRESIDENTA DEL INSTITUTO MORELENSE
DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

[1] Suprema Corte de Justicia de la Nación. (1981). *Derechos adquiridos y expectativas de derecho, concepto de los, en materia de retroactividad de leyes* (Registro digital 232511). Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 145-150, Primera Parte, p. 53. https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/232511

VOTO PARTICULAR EN CONTRA QUE FORMULA EL CONSEJERO ELECTORAL ADRIÁN MONTESSORO CASTILLO RESPECTO DEL ACUERDO IMPEPAC/CEE/280/2026

I. Antecedentes relevantes y continuidad de mi posición 2
II. El presupuesto expresamente previsto por la ley 4
III. La acreditación del partido y de sus representantes son actos distintos 6
IV. La titularidad de la prerrogativa, su destino y fiscalización 7
V. Alcances del criterio jurisdiccional federal utilizado como sustento 9
VI. El acuerdo no se limita a aplicar la norma, sino a interpretarla 11
VII. El deber de garantizar el ejercicio efectivo de las prerrogativas 12
VIII. Efectos concretos respecto de Somos 13
IX. La acreditación de la representación partidista debía sustentarse 15
X. Conclusión 22

En términos de lo dispuesto en el artículo 39 del Reglamento de Sesiones del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, formulo **voto particular en contra** del acuerdo citado al rubro, relativo a la modificación del calendario presupuestal del financiamiento público para actividades de representación política ante el Consejo Estatal Electoral, con motivo de la incorporación del partido político nacional **Somos** a la distribución de dicha prerrogativa.

Mi disenso no deriva de considerar que Somos carezca del derecho a recibirla. Por el contrario, **coincido plenamente en que dicho instituto político debe ser incorporado a su distribución**.

La diferencia radica en la premisa jurídica a partir de la cual la mayoría determina el momento desde el cual puede participar de esta prerrogativa, pues el acuerdo toma como elemento determinante la acreditación formal de su representación ante este Consejo Estatal Electoral, realizada el último día del mes de agosto de dos mil veintiséis.

Desde mi perspectiva, esa conclusión incorpora una condición que no se encuentra expresamente prevista en el artículo 30, inciso d), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, toda vez que dicho precepto reconoce la prerrogativa a los **partidos políticos acreditados ante el Consejo Estatal Electoral**, sin establecer que su

ministración quede suspendida hasta que exista una persona representante propietaria o suplente formalmente acreditada.

Esta cuestión cobra especial relevancia porque Somos ya había sido acreditado ante este organismo público local electoral desde el nueve de julio de dos mil veintiséis y, no obstante ello, quedó excluido de esta modalidad de financiamiento hasta que posteriormente formalizó su representación.

Por tanto, mi desacuerdo no se refiere a la existencia de la prerrogativa, a su finalidad ni a su distribución igualitaria, sino a la interpretación conforme a la cual **la acreditación de una persona representante se convierte en la condición que determina desde qué momento el partido político puede comenzar a participar de ella**.

I. Antecedentes relevantes y continuidad de mi posición

El veinticinco de junio de dos mil veintiséis, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó las resoluciones mediante las cuales otorgó registro como partidos políticos nacionales a Partido Paz y a **Somos** –en aquel entonces denominado provisionalmente “Somos México”–, con efectos constitutivos a partir del primero de julio de la presente anualidad.

Posteriormente, el nueve de julio de dos mil veintiséis, este Consejo Estatal Electoral aprobó, por mayoría, los acuerdos IMPEPAC/CEE/216/2026 e IMPEPAC/CEE/217/2026, mediante los cuales tuvo por acreditados ante este organismo público local electoral, respectivamente, a Partido Paz y a quien entonces se denominaba provisionalmente Somos México.

Cabe precisar que quien suscribe se apartó de dichas determinaciones y emitió los votos correspondientes.

Sin embargo, con independencia de mi posición respecto de la procedencia de aquellas acreditaciones, una vez que la mayoría de este Consejo Estatal Electoral decidió aprobarlas, tales determinaciones produjeron efectos jurídicos y debían constituir el punto de partida para resolver los derechos, obligaciones y prerrogativas que la legislación electoral local reconoce a los partidos políticos acreditados ante este instituto.

En aquella misma sesión se aprobó el acuerdo IMPEPAC/CEE/218/2026.

mediante el cual se efectuó una redistribución del financiamiento público para actividades ordinarias permanentes, actividades específicas y actividades de representación política, derivada de la incorporación de nuevos partidos políticos nacionales y locales al sistema de partidos con actuación en el Estado de Morelos.

Respecto de ese acuerdo formulé **voto concurrente**.

La razón para hacerlo bajo esa modalidad fue que compartí el sentido general de la determinación en cuanto a la necesidad de redistribuir el financiamiento público para actividades ordinarias permanentes y actividades específicas, además de que aquel acuerdo comprendía también los efectos presupuestarios vinculados con la incorporación del partido político local B. Ciudadano.

Mi diferencia se circunscribió a que Partido Paz y Somos habían sido excluidos de la prerrogativa para actividades de representación política prevista en el artículo 30, inciso d), del Código Electoral local, bajo la consideración de que aún no contaban con personas representantes formalmente acreditadas ante este Consejo.

En aquel voto sostuve que no resultaba jurídicamente congruente que, por una parte, el Consejo Estatal Electoral tuviera por acreditados a ambos institutos políticos ante el IMPEPAC y, por otra, al momento de determinar las prerrogativas derivadas de esa calidad jurídica, se les excluyera de una de ellas debido a **una condición que el texto legal no establece expresamente**.

Posteriormente, al modificarse nuevamente el calendario presupuestal con motivo de la acreditación de representantes de Partido Paz, mantuve el mismo criterio y formulé **voto particular en contra del acuerdo IMPEPAC/CEE/239/2026**.

En aquella ocasión señalé que compartía que Partido Paz fuera finalmente incorporado a la distribución de la prerrogativa, pero disentía de que el derecho se le reconociera únicamente a partir del momento en que formalizó la acreditación de sus representantes, pues desde mi perspectiva el presupuesto expresamente previsto por la ley se había actualizado desde su

acreditación como partido político ante este organismo electoral local.

El asunto que ahora se somete a consideración constituye **una nueva manifestación de la misma problemática jurídica**.

En esta ocasión, la materia central del acuerdo consiste en modificar nuevamente el calendario presupuestal de la prerrogativa para actividades de representación política, ahora con motivo de la acreditación de la representación del partido político nacional **Somos**, realizada el último día del mes de agosto de dos mil veintiséis.

Como consecuencia de ello, se modifica la distribución correspondiente a los meses de agosto y septiembre, considerando ahora a **doce partidos políticos**, en lugar de los once que venían participando de esta prerrogativa.

Desde luego, comparto que Somos sea incorporado.

Lo que continúo sin compartir es la premisa jurídica conforme a la cual esa incorporación depende de la fecha en que el instituto político formalizó la acreditación de la persona que ejercerá su representación ante este órgano colegiado.

Mi posición jurídica, por tanto, **ha permanecido invariable**.

En el acuerdo IMPEPAC/CEE/218/2026 formulé voto concurrente porque acompañé la redistribución del financiamiento ordinario y específico, pero disentí de la exclusión de Partido Paz y Somos respecto de la prerrogativa de representación política.

Posteriormente, mediante el acuerdo **IMPEPAC/CEE/239/2026**, al incorporarse a Partido Paz a dicha prerrogativa únicamente después de haber acreditado formalmente a sus representantes, formulé voto particular en contra.

Ahora, al reproducirse esa misma interpretación respecto de Somos, nuevamente me aparto del sentido de la determinación.

II. El presupuesto expresamente previsto por la ley

El punto de partida debe ser el artículo 30, inciso d), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, que, en la parte que interesa, establece:

> **Artículo 30.** El financiamiento público para los partidos políticos que mantengan su registro después de cada elección, se compondrá de las ministraciones destinadas al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, las de carácter específico y las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales. Se otorgará conforme a lo siguiente y a lo que disponga la normativa de la materia:
>
> […]
>
> **d)** Para actividades de la Representación Política ante el Consejo Estatal, **los partidos políticos acreditados ante el Consejo Estatal** percibirán de forma anual, en ministraciones mensuales, una prerrogativa de representación política ante los órganos electorales que equivaldrá al seis por ciento adicional del monto total correspondiente al financiamiento por concepto de actividades ordinarias permanentes del ejercicio de que corresponda.
>
> […]

De su lectura se desprenden, desde mi perspectiva, dos elementos normativos claramente diferenciables.

- El primero es el **supuesto jurídico** previsto por la norma: que se trate de un partido político acreditado ante el Consejo Estatal Electoral.

- El segundo es la **consecuencia jurídica** que deriva de aquella calidad: que es poder percibir anualmente, mediante ministraciones mensuales, la prerrogativa para actividades de representación política.

Entre ambos extremos, el legislador no incorporó expresamente un requisito adicional consistente en que previamente deba haberse formalizado la acreditación de una persona física como representante propietaria o suplente del instituto político.

La norma legal en comento **no dispone** que:

> […] los partidos políticos que tengan representantes acreditados percibirán la prerrogativa.

Lo que dispone es que:

> […] los partidos políticos acreditados ante el Consejo Estatal percibirán la prerrogativa.

Esa distinción, aunque pueda parecer terminológica, tiene consecuencias jurídicas que no deben dejarse de lado, debido a que la legislación morelense identifica como titular de la prerrogativa al **partido político**, no a la persona que posteriormente ejercerá su representación ante el órgano colegiado.

Por ello, desde mi perspectiva, una vez que este Consejo Estatal Electoral tuvo por acreditados a Somos ante el IMPEPAC, dicha calidad debía producir los efectos jurídicos que la propia legislación local le atribuye, entre ellos el acceso a la prerrogativa prevista en el artículo 30, inciso d) del Código Electoral local.

Reconocer la acreditación del referido partido para determinados efectos, pero supeditar uno de los derechos vinculados a esa misma calidad jurídica a una condición adicional que en la legislación no expresa**, implica introducir una distinción que no se advierte en el texto de la disposición aplicable**.

III. La acreditación del partido y de sus representantes son actos distintos

En mi concepto, el acuerdo aprobado parte de una equiparación que no comparto, puesto que se homologa la acreditación del partido político ante el organismo público local con la acreditación de las personas que habrán de ejercer su representación ante el Consejo Estatal Electoral.

Si bien se trata de actos relacionados, jurídicamente son totalmente distintos:

- La **acreditación del partido político** supone el reconocimiento de su calidad para actuar en el ámbito electoral local y constituye el presupuesto a partir del cual puede ejercer los derechos, asumir las obligaciones y acceder a las prerrogativas que la legislación estatal vincula con dicha condición.

- La **designación y acreditación de una persona representante**, en cambio, individualiza a quien ejercerá determinados derechos y

funciones en nombre del instituto político dentro del órgano colegiado.

De que ambas figuras se encuentren estrechamente relacionadas no se sigue necesariamente que la segunda constituya una condición suspensiva de los derechos derivados de la primera.

Precisamente aquí encuentro la principal diferencia con el acuerdo aprobado.

La determinación parte de que, como Somos formalizó la acreditación de su representación hasta finales del mes de agosto, es a partir de ese hecho cuando debe participar en la distribución de esta prerrogativa.

Con ello, en los hechos, la decisión mayoritaria construye la siguiente regla:

partido político acreditado ante el Consejo Estatal
+
persona representante acreditada
=
derecho a recibir la prerrogativa de representación política

Sin embargo, a mi modo de ver, el artículo 30, inciso d) del Código Electoral local, únicamente contempla de manera expresa:

partido político acreditado ante el Consejo Estatal
=
derecho a percibir la prerrogativa de representación política

No desconozco que la existencia de una representación partidista guarda una relación evidente con el destino de los recursos; lo que no comparto es que esa relación funcional se transforme, sin disposición expresa y sin sustento normativo alguno, en una condición para el nacimiento mismo del derecho.

IV. La titularidad de la prerrogativa, su destino y fiscalización

Para resolver esta cuestión considero indispensable diferenciar tres planos jurídicos que, aunque relacionados, no deben confundirse:

1. **quién es titular de la prerrogativa;**

2. **a qué actividades deben destinarse los recursos; y**

3. **cómo debe justificarse y fiscalizarse posteriormente su ejercicio.**

En cuanto al primer punto, el artículo 30, inciso d), reconoce la prerrogativa al **partido político acreditado ante el Consejo Estatal Electoral**.

Respecto del segundo, es indudable que el recurso tiene una finalidad específica: **solventar las actividades de representación política ante los órganos electorales**.

Finalmente, respecto de su ejercicio, **corresponde al partido justificar el destino de los recursos recibidos conforme al régimen de fiscalización aplicable** y será la autoridad electoral competente la que, en ejercicio de sus atribuciones, determine si aquellos fueron ejercidos conforme a las finalidades legalmente previstas.

Estas tres dimensiones **no son intercambiables**.

En particular, el hecho de que el recurso deba utilizarse para actividades relacionadas con la representación partidista no transforma a la persona representante en titular individual del financiamiento.

La prerrogativa **no constituye un salario, una dieta ni una remuneración que el IMPEPAC entregue directamente a la persona representante por acudir a las sesiones del Consejo Estatal Electoral**.

Tampoco existe una relación retributiva o comprobatoria conforme a la cual la autoridad electoral deba verificar primero la prestación de una determinada actividad individual para, entonces, poder liberar el financiamiento al partido.

Por ello, considero que la ministración de esta prerrogativa no debería operar bajo una lógica semejante a un **contrarrecibo**, en la que la acreditación formal de una persona representante funcione como requisito para liberar un recurso que la legislación atribuye al instituto político.

Aceptar el proceder de la posición mayoritaria podría llevarnos a un escenario en el que fuera factible trasladar una lógica semejante a otras modalidades de financiamiento público, como lo sería, por ejemplo, que antes de ministrar

el financiamiento destinado para actividades específicas debiera verificarse qué actividad concreta realizará el partido durante el mes correspondiente, o si antes de otorgarle financiamiento para actividades ordinarias tuviera que demostrarse qué actividad ordinaria habrá de desarrollar.

Sin embargo, esa no es, desde mi perspectiva, la arquitectura del sistema de financiamiento público a los partidos políticos.

Conforme a mi saber y entender, el modelo actual de financiamiento en este país obliga a todas las autoridades electorales administrativas a determinar y ministrar las prerrogativas conforme a los presupuestos establecidos por la ley. Posteriormente, el ejercicio, destino y comprobación de los recursos se encuentran sujetos al sistema de fiscalización correspondiente.

Por tanto, una eventual ausencia temporal de representante formalmente acreditado podrá tener implicaciones respecto del ejercicio material del recurso o de su posterior comprobación, pero no encuentro una disposición que permita convertir esa circunstancia, desde la etapa misma de distribución, en causa para suspender el reconocimiento de la prerrogativa al partido acreditado.

V. Alcances del criterio jurisdiccional federal utilizado como sustento

El acuerdo aprobado sustenta parte de su motivación en el criterio sostenido por la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el juicio de revisión constitucional electoral SCM-JRC-13/2023.

Al respecto, considero importante delimitar cuidadosamente cuáles fueron los alcances de esa determinación jurisdiccional, porque en aquel asunto, la controversia fundamental consistió en determinar **cómo debía distribuirse la prerrogativa para actividades de representación política**.

En dicho asunto, un partido político nacional sostenía que debía utilizarse, por analogía, un esquema semejante al aplicable al financiamiento ordinario, para efectos de que la prerrogativa de representación política se entregara a los partidos políticos participantes en función de la mayor o menor fuerza electoral que tuviera dentro del estado.

La Sala Regional Ciudad de México desestimó esa pretensión y consideró correcta la interpretación conforme a la cual la referida prerrogativa debía distribuirse **igualitariamente entre todos los partidos políticos**, atendiendo a la naturaleza y finalidad específica del recurso.

Para arribar a dicha conclusión se destacó que las funciones, derechos y obligaciones que ejercen las representaciones partidistas ante el Consejo Estatal Electoral son sustancialmente las mismas, de manera que la fuerza electoral de un instituto político no justifica que su representación disponga de una cantidad superior a la correspondiente a otra fuerza política.

Comparto plenamente ese criterio y, desde luego, **reconozco que la Sala Regional delimitó la finalidad de ese recurso y sostuvo que se encuentra relacionado con las actividades desarrolladas por las representaciones acreditadas ante los órganos electorales del IMPEPAC**.

Sin embargo, es necesario distinguir entre **el destino de la prerrogativa y la forma de distribuirla**, por una parte, y **el momento en que nace el derecho del partido político a recibirla**, por otra.

La sentencia resolvió las primeras dos cuestiones (el destino y la forma), pero no advierto que se haya pronunciado en torno al último aspecto (el momento).

Es decir, la sentencia del juicio SCM-JRC-13/2023 no tuvo como problema jurídico determinar si un partido político ya acreditado ante el IMPEPAC debía dejar de recibir esta prerrogativa durante el periodo en el cual aún no hubiera formalizado la acreditación de una persona representante ante el Consejo, ya que la litis no versó sobre una eventual condición suspensiva para el pago de la referida ministración.

Más aún, al analizar el sistema de financiamiento morelense, la propia Sala Regional Ciudad de México reconoció que, en Morelos, **todos los partidos políticos con acreditación local tienen derecho a recibir plenamente por igual una prerrogativa adicional para sus actividades de representación política ante el Consejo Estatal**.

Asimismo, al desarrollar la regla de igualdad, hizo referencia a que este financiamiento debe ser otorgado de manera igualitaria a los partidos políticos

con acreditación local, precisamente porque la fuerza electoral carece de relevancia respecto de las funciones que desarrollan sus representaciones.

Por tanto, considero que las referencias de aquella sentencia a las personas representantes acreditadas permiten delimitar **el destino específico de los recursos**, pero no necesariamente autorizan a convertir la existencia de una persona representante en una condición constitutiva para reconocer la prerrogativa al partido político.

Sostenerlo así supondría extender los efectos de aquella ejecutoria hacia una cuestión que no constituyó la controversia que la mencionada Sala Regional tuvo que resolver.

VI. El acuerdo no se limita a aplicar la norma, sino a interpretarla

Considero relevante hacer esta precisión porque, tratándose de autoridades administrativas electorales, algunas voces –en ocasiones– guían su actuar a partir de una concepción particularmente restrictiva respecto de nuestra posibilidad de interpretar las disposiciones legales y sostienen abiertamente que nuestra función consiste esencialmente en aplicarlas sin más. Cuestión que desde luego no comparto.

Bajo esa aproximación, el presente asunto demuestra que la aplicación del derecho difícilmente puede desvincularse por completo de una operación interpretativa.

El artículo 30, inciso d), no establece expresamente:

> […] la prerrogativa será entregada al partido político a partir de que acredite a sus representantes.

Esa proposición normativa **no aparece en el texto legal**; es el propio Consejo Estatal Electoral el que, al vincular la finalidad del recurso con la existencia de representantes formalmente acreditados, concluye que la ministración debe comenzar precisamente a partir del mes en que estos son designados.

Eso constituye una **interpretación** y, desde luego, respeto plenamente que la mayoría de este órgano colegiado arribe a dicha conclusión; sin embargo, mi discrepancia consiste en que, desde mi perspectiva, esa lectura incorpora

un requisito adicional al presupuesto expresamente señalado por la norma.

Y esto es particularmente relevante decirlo, porque no estamos simplemente ejecutando de forma mecánica una consecuencia expresamente establecida en el Código Electoral local, sino eligiendo, entre distintas lecturas posibles, aquella conforme a la cual la acreditación personal de una representación constituye una condición adicional para la ministración.

Precisamente porque se trata de una interpretación, corresponde valorar si esta sería la que mejor se ajusta al texto de la disposición, a la naturaleza jurídica del financiamiento y al régimen de derechos y prerrogativas de los partidos políticos. Desde mi perspectiva, no lo es.

VII. El deber de garantizar el ejercicio efectivo de las prerrogativas

En el voto concurrente que formulé en el acuerdo IMPEPAC/CEE/218/2026 hice referencia, como elemento orientador, a la respuesta emitida mediante el oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/2153/2026 a una consulta formulada por el organismo público local electoral del Estado de México.

Desde luego, dicha respuesta no constituye una norma general ni un criterio vinculante para este Consejo Estatal Electoral.

Sin embargo, considero que aporta un elemento interpretativo relevante.

En aquella respuesta se precisó que corresponde a los organismos públicos locales electorales garantizar los derechos y el acceso a las prerrogativas de los partidos políticos, así como la ministración oportuna del financiamiento público que les corresponda.

También se indicó que, una vez acreditados los partidos políticos nacionales ante la autoridad electoral local, compete al órgano superior de dirección del organismo público local determinar, administrar y ministrar el financiamiento público correspondiente en el ámbito estatal, de conformidad con la normativa aplicable.

Esos razonamientos fueron recogidos expresamente en el voto que formulé respecto del acuerdo IMPEPAC/CEE/218/2026.

Esta orientación resulta congruente con la interpretación que sostengo.

Una vez que un partido político ha sido tenido por acreditado ante el organismo público local electoral, corresponde a este garantizar el ejercicio de los derechos y prerrogativas que la legislación local atribuye a dicha calidad.

Naturalmente, ello debe realizarse observando las condiciones expresamente establecidas por el orden jurídico.

Lo que no considero jurídicamente adecuado es que, desde la propia etapa de distribución, sea la autoridad administrativa la que incorpore una condición que el legislador no estableció y, a partir de ella, difiera temporalmente el ejercicio de una prerrogativa.

La función de garantizar los derechos y prerrogativas partidistas exige, desde mi perspectiva, evitar obstáculos que carezcan de un fundamento normativo suficientemente claro, sin que ello implique disminuir las obligaciones posteriores de comprobación, rendición de cuentas y fiscalización.

VIII. Efectos concretos respecto de Somos

Las consideraciones anteriores deben proyectarse específicamente sobre el partido político nacional **Somos**.

Dicho instituto político adquirió registro como partido político nacional con efectos a partir del primero de julio de dos mil veintiséis y, posteriormente, el nueve de julio de la misma anualidad, este Consejo Estatal Electoral determinó tenerlo por acreditado ante el IMPEPAC.

Desde mi perspectiva, desde ese momento se actualizó el presupuesto jurídico previsto por el artículo 30, inciso d), del Código Electoral local para acceder a la prerrogativa de representación política ante el Consejo Estatal Electoral.

No obstante, en la redistribución aprobada mediante el acuerdo IMPEPAC/CEE/218/2026, Somos no fue considerado para dicha prerrogativa debido a que todavía no contaba con una persona representante formalmente acreditada ante este órgano colegiado.

Esa fue precisamente una de las razones que motivaron mi voto concurrente.

Ahora, una vez que Somos formalizó su representación ante este Consejo Estatal Electoral el último día del mes de agosto, la mayoría determina incorporarlo a la distribución y efectuar los ajustes correspondientes a los meses de agosto y septiembre, considerando a partir de esta modificación a doce partidos políticos en lugar de once.

Comparto que Somos sea incorporado.

Mi desacuerdo consiste en que dicha incorporación continúe descansando en la premisa de que el derecho a la prerrogativa dependía de que previamente formalizara la acreditación de su representación.

Dicho de otra manera, el acuerdo actual **corrige hacia adelante la exclusión material de Somos, pero mantiene intacta la premisa jurídica que originó esa exclusión**.

Desde la interpretación que he sostenido, Somos debió participar de esta prerrogativa desde que surtió efectos su acreditación ante este organismo público local electoral, realizándose, en su caso, los ajustes presupuestales, temporales o proporcionales que jurídicamente correspondieran.

La circunstancia de que formalizara su representación hasta el último día de agosto puede resultar relevante para el ejercicio material de los recursos y para su posterior comprobación, pero no encuentro que constituya, por disposición expresa del artículo 30, inciso d), el hecho jurídico del cual dependa el nacimiento del derecho.

Advierto, además, una circunstancia que, sin constituir la razón principal de mi disenso, refuerza la necesidad de revisar la lógica empleada.

Si la acreditación de la persona representante tuvo lugar **el último día del mes de agosto** y, no obstante ello, la determinación aprobada incorpora a Somos en la redistribución correspondiente **al propio mes de agosto**, entonces la misma decisión evidencia que aquella acreditación no está siendo tratada como un hecho estrictamente constitutivo cuyo efecto económico opere únicamente hacia el futuro a partir del momento exacto en

que ocurrió.

Si la acreditación personal fuera jurídicamente el acto del cual nace el derecho, sería necesario explicar por qué un hecho ocurrido al concluir el mes permite participar al partido en la distribución correspondiente a todo ese mismo periodo.

No hago descansar mi voto en esta consideración.

Sin embargo, sí estimo que evidencia que la relación entre la fecha de acreditación de la persona representante y el nacimiento temporal de la prerrogativa no resulta automática.

Mi argumento central sigue siendo más sencillo: **el artículo 30, inciso d), identifica como presupuesto jurídico la acreditación del partido político ante el Consejo Estatal Electoral, no la fecha en que posteriormente se acredite a la persona física que ejercerá su representación**.

Por ello, mi voto en contra no cuestiona que a partir del presente acuerdo Somos participe junto con los demás institutos políticos en la distribución.

Lo que cuestiona es que se consolide nuevamente como criterio que **la acreditación de la persona representante opera como condición para acceder a una prerrogativa cuyo titular legal es el partido político acreditado ante el Consejo Estatal Electoral**.

IX. La acreditación de la representación partidista debía sustentarse

Si la mayoría de este Consejo Estatal Electoral considera que la existencia de una persona representante formalmente acreditada constituye una condición *sine qua non* para que un partido político pueda acceder a la prerrogativa prevista en el artículo 30, inciso d), del Código Electoral local, entonces, por congruencia, **la verificación de esa representación debe realizarse con un estándar particularmente cuidadoso y sobre la base de elementos que permitan tener plena certeza respecto de la validez de la designación**.

Esta consideración resulta especialmente importante porque, conforme a la interpretación mayoritaria –que no comparto–, la acreditación de la persona

representante deja de ser única y exclusivamente una cuestión vinculada con la integración y funcionamiento de este órgano colegiado y adquiere, además, **consecuencias presupuestales directas**, pues de ella se hace depender el momento a partir del cual el partido político participa de una prerrogativa financiada con recursos públicos.

Dicho de otra manera, si para la mayoría la acreditación de una persona representante es el hecho jurídico que permite liberar esta modalidad de financiamiento, entonces resulta indispensable que la autoridad tenga suficientemente esclarecido que esa representación fue designada por las instancias partidistas facultadas para ello.

Es precisamente bajo esa lógica –y únicamente para efectos argumentativos, pues reitero que no comparto la premisa de la cual parte– que estimo relevante dejar constancia de la secuencia administrativa y documental que precedió a la incorporación de la representación del partido **entonces denominado provisionalmente "Somos México"** ante este Consejo Estatal Electoral.

El veintiséis de agosto de dos mil veintiséis, por oficio **IMPEPAC/DEOyPP/JABV/433/2026**, la Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos hizo del conocimiento de las áreas de este Instituto que, después de la revisión correspondiente, había verificado que la designación de **Salvador Navarro Martínez**, como representante propietario, y **Celso Mario Hernández Barajas**, como representante suplente del partido entonces denominado "Somos México", cumplía con los requisitos previstos en su normativa interna, informando además que en esa misma fecha se había realizado el registro correspondiente.

Sin embargo, para ese momento existía una secuencia previa de actuaciones institucionales que, desde mi perspectiva, hacía necesario conocer con mayor precisión cuáles eran los elementos que permitían tener por definitivamente superadas las observaciones formuladas durante la sustanciación.

En efecto, previamente la propia Secretaría Ejecutiva había analizado una primera solicitud de designación y había determinado su improcedencia, al considerar que quienes la suscribían no contaban con facultades para efectuarla conforme a la normativa partidista. Posteriormente, el propio partido

invocó su régimen fundacional y transitorio de veintiuno de marzo de dos mil veintiséis, conforme al cual la Secretaría de Operación Electoral y Alianzas del Comité Nacional podía efectuar esas designaciones **en coordinación con la persona titular de esa misma Secretaría en el ámbito estatal**.

Precisamente por esa exigencia de coordinación, las propias áreas de este Instituto realizaron distintas actuaciones tendentes a verificar quién ostentaba válidamente el cargo correspondiente en el ámbito estatal.

Todavía el veinticuatro de agosto, nuestra Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos advirtió que no se había recibido respuesta del Instituto Nacional Electoral respecto de la titularidad de la Secretaría de Operación Electoral y Alianzas en Morelos y requirió al partido para que aportara la documentación mediante la cual pudiera acreditarse la procedencia de la designación de Beatriz Cabrera Fuentes en dicho cargo.

En respuesta, el veintiséis de agosto el partido manifestó que Beatriz Cabrera Fuentes había sido electa el nueve de julio como titular de esa Secretaría en Morelos y señaló expresamente que la integración correspondiente había sido presentada ante el Instituto Nacional Electoral y que **se encontraba “en trámite”**.

Fue precisamente ante esa secuencia que, el mismo veintiséis de agosto, mediante oficio **IMPEPAC/CEE/AMC/065/2026**, esta consejería solicitó a la Secretaria Ejecutiva y al Director Ejecutivo de Organización y Partidos Políticos información complementaria respecto de los elementos jurídicos y documentales que sustentaban la procedencia de la acreditación comunicada mediante el diverso oficio IMPEPAC/DEOyPP/JABV/433/2026.

En aquel oficio solicité, entre otras cuestiones, conocer las razones por las cuales se habían considerado superadas las observaciones y requerimientos previamente formulados; qué documentación había permitido tener por acreditado el carácter de Beatriz Cabrera Fuentes como titular de la Secretaría de Operación Electoral y Alianzas en Morelos; si ya se contaba con respuesta del Instituto Nacional Electoral respecto de la integración del órgano estatal; y cuál había sido el razonamiento para estimar satisfecho el requerimiento, pese a que el propio partido había informado que el registro de aquella integración permanecía en trámite.

La solicitud fue muy cuidadosa, pues en ella precisé expresamente que **no partía de una conclusión sobre la improcedencia de la acreditación ni constituía oposición respecto de las personas designadas**, sino que tenía por objeto conocer los elementos que habían permitido superar las observaciones formuladas por las propias áreas del Instituto.

A esa secuencia se agrega un hecho institucional que considero relevante y es que durante la sesión ordinaria del Consejo Estatal Electoral celebrada el **veintisiete de agosto de dos mil veintiséis**, esto es, un día después, al abordarse los asuntos generales, la representación del Partido Acción Nacional preguntó a la Secretaria Ejecutiva si, para ese momento, el partido entonces denominado “Somos México” contaba ya con alguna representación acreditada ante este Consejo Estatal Electoral.

En respuesta, la Secretaria Ejecutiva manifestó que **para ese momento no se contaba con una representación acreditada ante el Consejo Estatal Electoral**.

Este antecedente resulta importante únicamente porque permite advertir que, incluso institucionalmente, la situación de la representación no aparecía aún como una cuestión absolutamente uniforme o definitivamente despejada, ya que un día antes, la Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos había comunicado a todas las áreas de este Instituto mediante oficio que la designación de dichas personas cumplía con todos los requisitos y que había efectuado el registro correspondiente, mientras que al día siguiente, durante una sesión pública de este Consejo Estatal Electoral, la Secretaría Ejecutiva señaló que todavía no se contaba con una representación acreditada.

Hago esta precisión solo para poner de **manifiesto cuán complejo fue la secuencia administrativa y la necesidad de extremar la certeza antes de atribuir consecuencias jurídicas adicionales a la acreditación**.

A ello se sumó posteriormente un elemento proveniente del propio Instituto Nacional Electoral, ya que mediante oficio **INE/DEPPP/DE/DPPF/2534/2026**, de veintiocho de agosto de dos mil veintiséis, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos de la autoridad nacional nos informó que, a la fecha de emisión de dicha comunicación, la representación del partido entonces denominado “Somos México” ante el Consejo General **no había**

comunicado ni remitido documentación alguna para acreditar la integración de los Consejos Estatales y Comités Estatales de ese partido político en el estado de Morelos.

La autoridad nacional agregó que el partido contaba hasta el **catorce de septiembre de dos mil veintiséis** para notificar la integración definitiva de sus órganos directivos nacionales y, en su caso, estatales, y que, una vez recibida esa documentación, se llevaría a cabo el proceso de revisión y análisis correspondiente, para posteriormente comunicar la determinación que procediera.

Esta respuesta, sin duda, es fundamental porque evidencia que, al veintiocho de agosto de este año, **el Instituto Nacional Electoral no había efectuado todavía una revisión de la integración del órgano partidista estatal** cuya existencia y titularidad constituían, a su vez, parte de la cadena de facultades utilizada para justificar la designación de la representación ante este Instituto Electoral local.

Posteriormente, mediante oficio **IMPEPAC/SE/MSL/2669/2026, de treinta y uno de agosto de dos mil veintiséis**, la Secretaría Ejecutiva dio respuesta a mi solicitud, a través del cual, en esencia, explicó que al efecto se habían considerado suficientes, de manera concatenada, el Acuerdo del Consejo Nacional de veintiuno de marzo y el acta de la Primera Sesión Ordinaria del Consejo Estatal celebrada el nueve de julio; que los actos emitidos por los órganos partidistas gozaban de presunción de validez mientras no existiera determinación en sentido contrario; y que no resultaba indispensable que el Instituto Nacional Electoral hubiera declarado previamente procedente la integración de los órganos estatales para reconocer determinados efectos a esos actos internos.

Reconozco plenamente esa explicación y el razonamiento jurídico que la sustenta; sin embargo, la propia respuesta de la Secretaría Ejecutiva deja constancia de que fue **hasta el treinta y uno de agosto** cuando se conoció formalmente la contestación del Instituto Nacional Electoral, en la que este informó que no había recibido documentación para acreditar la integración de los Consejos Estatales y Comités Estatales del partido en Morelos y que aún se encontraba vigente el plazo para comunicar la integración definitiva de

esos órganos partidistas.

Ese mismo treinta y uno de agosto, durante sesión extraordinaria del Consejo Estatal Electoral, se tomó protesta al representante propietario del partido entonces denominado “Somos México” ante este órgano colegiado.

Así, las constancias permiten advertir un devenir institucional que, lejos de mostrar una secuencia enteramente lineal, revela que prácticamente hasta el mismo momento de la toma de protesta coexistían distintos elementos que hacían evidente una falta de certeza al respecto, a saber:

> (**i**) una determinación inicial de improcedencia; (**ii**) posteriores requerimientos para verificar quién contaba con facultades para intervenir en la designación; (**iii**) una comunicación de nuestra Dirección Ejecutiva local considerando plenamente satisfechos los requisitos; (**iv**) una manifestación posterior de nuestra Secretaría Ejecutiva, durante sesión pública, en el sentido de que aún no se contaba con alguna representación acreditada; (**v**) una consulta pendiente ante el Instituto Nacional Electoral; y finalmente (**vi**) una respuesta de esa autoridad electoral nacional informando que todavía no tenía documentación para acreditar la integración de los órganos partidistas estatales.

Bajo esas condiciones, a mi consideración, la respuesta contenida en el oficio IMPEPAC/SE/MSL/2669/2026 sí explica la construcción jurídica seguida por las áreas administrativas de este organismo electoral local para considerar viable la acreditación; sin embargo, **su fuerza conclusiva necesariamente debe ponderarse junto con todas las demás constancias que integraban el expediente**, particularmente con la respuesta oficial del Instituto Nacional Electoral conocida ese mismo treinta y uno de agosto.

No sostengo con ello que corresponda ahora resolver nuevamente sobre aquella acreditación, pues mi planteamiento es más acotado: **si la mayoría ha decidido elevar la existencia de una representación formalmente acreditada como una condición indispensable para el nacimiento de una prerrogativa económica, entonces la suficiencia de los elementos que sustentan esa representación adquiere una relevancia reforzada**.

Y, desde mi perspectiva, las propias constancias permiten advertir que, al

momento en que finalmente se tomó protesta a la representación, **subsistían elementos que impedían considerar enteramente despejada y pulcra la cadena documental y partidista de la que derivaba su designación**.

Por ello, aun suponiendo sin conceder que fuera correcta la tesis mayoritaria conforme a la cual la prerrogativa únicamente puede ministrarse cuando existe una persona representante formalmente acreditada ante este Consejo Estatal Electoral, no comparto que, para efectos de atribuir a esa acreditación efectos presupuestales, pudiera considerarse aquel presupuesto satisfecho con el grado de certeza que una determinación de esa naturaleza exigía.

En otras palabras, **si la representación es, para la mayoría, la llave que abre el acceso a esta prerrogativa, entonces esta autoridad debía tener absoluta claridad respecto de que esa llave se encontraba jurídicamente bien integrada antes de hacer depender de ella la entrega de recursos públicos por concepto de representación política ante este Instituto**.

Esta consideración es subsidiaria y no modifica mi premisa principal, pues sigo estimando que el artículo 30, inciso d), reconoce la prerrogativa al **partido político acreditado ante el Consejo Estatal Electoral**, y no condiciona su nacimiento y entrega a la existencia previa de una persona representante.

Pero, precisamente porque la mayoría ha adoptado la tesis contraria, considero indispensable dejar constancia de que **esa misma tesis exigía una verificación especialmente rigurosa de la condición que se decidió convertir en determinante para el acceso al financiamiento**.

En ese sentido, el presente voto constituye también **manifestación expresa y constancia documental de mi actuación institucional frente a esta cuestión**. Desde el momento en que advertí dudas respecto de los elementos que sustentaban la acreditación de la representación del partido entonces denominado provisionalmente “Somos México”, solicité formalmente su esclarecimiento mediante el oficio **IMPEPAC/CEE/AMC/065/2026**, en el que requerí conocer las razones, fundamentos y constancias documentales con base en las cuales se había considerado procedente dicha representación.

De igual manera, mediante este voto particular dejo asentada la secuencia de actuaciones posteriores, incluidas las respuestas y comunicaciones

institucionales que evidencian que la cuestión no se encontraba exenta de elementos que ameritaban una revisión particularmente cuidadosa.

Mi propósito al incorporarlas aquí es simplemente **hacer constar que advertí oportunamente la situación, solicité su esclarecimiento y me aparto de que, sobre esa base documental, se atribuya a la acreditación de la representación el carácter de condición determinante para la entrega de recursos públicos**.

Por ello, este voto particular debe entenderse también como **constancia de mi posición y de las actuaciones que desplegué dentro del ámbito de mis atribuciones**, para que, en caso de que posteriormente alguna instancia legal deba examinar la regularidad del procedimiento o la existencia de alguna responsabilidad derivada de tales actuaciones, pueda **individualizarse la conducta y participación de cada órgano, área o persona servidora pública conforme a las decisiones efectivamente adoptadas y a las atribuciones que legalmente correspondían a cada una**.

En otras palabras, aquí dejo expresamente asentado que la situación fue advertida, documentada y puesta en conocimiento de las áreas competentes por esta consejería, sin que mi participación pueda entenderse como una adhesión a la suficiencia de las constancias que sirvieron para tener por satisfecha aquella condición ni, mucho menos, como una renuncia a las observaciones que oportunamente formulé.

X. Conclusión

Por las razones expuestas, considero que el acuerdo aprobado parte de una interpretación del artículo 30, inciso d), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos que no comparto.

Desde mi perspectiva:

- El presupuesto expresamente establecido por la legislación morelense para acceder a esta prerrogativa es la calidad de **partido político acreditado ante el Consejo Estatal Electoral**.

- La acreditación del partido político y la acreditación de las personas

que ejercerán su representación constituyen actos jurídicos distintos.

- La finalidad específica del recurso no debe confundirse con la titularidad de la prerrogativa. El financiamiento corresponde al partido político, aunque su destino se encuentre legalmente circunscrito a las actividades de representación política.

- La acreditación de una persona representante no se encuentra prevista expresamente en el artículo 30, inciso d), como condición suspensiva para el nacimiento o ministración de la prerrogativa.

- La sentencia dictada en el juicio SCM-JRC-13/2023 delimitó la finalidad de esta modalidad de financiamiento y confirmó que debe distribuirse igualitariamente, pero no estableció que el derecho del partido político nazca únicamente cuando exista una persona representante formalmente acreditada.

- La interpretación adoptada por la mayoría incorpora una condición adicional al texto legal y, por ello, no constituye una mera aplicación literal de la disposición, sino un ejercicio interpretativo cuyo resultado no comparto.

- Somos debió ser considerado para esta prerrogativa desde que surtió efectos su acreditación ante este organismo público local, efectuándose respecto del periodo correspondiente los ajustes presupuestales que jurídicamente procedieran, sin hacer depender ese derecho de la posterior acreditación de su representación.

- La incorporación que ahora se aprueba resulta correcta en cuanto reconoce finalmente la participación de Somos en la distribución; sin embargo, desde mi perspectiva, resulta insuficiente en sus efectos temporales y mantiene una premisa jurídica que no encuentro expresamente prevista por el legislador.

- Aun suponiendo, sin conceder, que fuera correcta la tesis mayoritaria conforme a la cual la existencia de una persona representante formalmente acreditada constituye condición indispensable para acceder a esta prerrogativa, tal premisa exigía, precisamente por las

consecuencias presupuestales que se hacen depender de ella, una verificación especialmente rigurosa respecto de la regularidad y suficiencia documental de dicha representación.

- Las constancias analizadas permiten advertir que, al momento en que finalmente se tuvo por acreditada y se tomó protesta a la representación del partido entonces denominado provisionalmente “Somos México”, subsistían antecedentes, requerimientos, consultas y respuestas institucionales que evidenciaban que la cuestión no había transitado de manera absolutamente lineal ni se encontraba exenta de aspectos que ameritaban una revisión particularmente cuidadosa.

Mi voto en contra, por tanto, **no significa que me oponga a la incorporación de Somos a esta prerrogativa**. Por el contrario, estimo que su incorporación es jurídicamente procedente.

Mi diferencia consiste en que debió producirse desde que el partido adquirió la calidad jurídica que el artículo 30, inciso d), expresamente contempla: **la de partido político acreditado ante el Consejo Estatal Electoral**, y no únicamente a partir de la posterior acreditación de la persona que ejercerá su representación.

La acreditación de representantes puede resultar relevante para el ejercicio material y destino de los recursos, así como para su posterior fiscalización; pero no encuentro fundamento suficiente para convertirla en una especie de requisito previo o **contrarrecibo** del que dependa el nacimiento de una prerrogativa que el Código Electoral local atribuye expresamente al partido político acreditado.

Son estas las razones que sustentan mi voto particular en contra.

ADRIÁN MONTESSORO CASTILLO
CONSEJERO ELECTORAL